

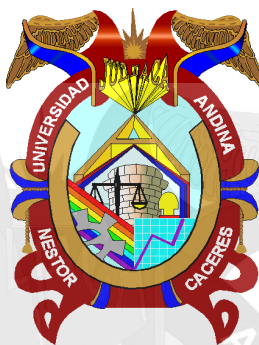


TESIS UANCV



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO



**"IMPORTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO
CONSTITUCIONAL Y SU ROL EN LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA CON EL NUEVO MODELO
PROCESAL PENAL, PUNO: 2011- 2012"**

TESIS

PRESENTADA POR:

HAYDEÉ MILAGROS QUICO LÓPEZ

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGÍSTER EN DERECHO

MENCIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL

JULIACA- PERÚ

2015



UNIVERSIDAD ANDINA "NESTRO CÁCERES VELÁSQUEZ"

ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO

**"IMPORTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO
CONSTITUCIONAL Y SU ROL EN LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA CON EL NUEVO MODELO
PROCESAL PENAL, PUNO: 2011- 2012"**

TESIS PRESENTADA POR:
HAYDEÉ MILAGROS QUICO LÓPEZ

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN DERECHO. CON
MENCIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL

APROBADA POR:

PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. Fredi Cruz Huarcaya Sanchez

PRIMER MIEMBRO

Mgtr. Claver Tórres Tórres

SEGUNDO MIEMBRO

Mgtr. Jesús Cruz Cervantes.

ASESOR DE TESIS

Mgtr. Rosmary Karina Alata Tito



Dedico el presente trabajo a mi esposo
JIMMY, mis hijos AARON y VALERY



Con eterna gratitud:

A los miembros del jurado y mis docentes por
sus sabias enseñanzas y observaciones para
el desarrollo de esta investigación.



ÍNDICE

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice	v
Resumen	xiv
Abstract	xv
Introducción	xvi

CAPÍTULO I

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA Y PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Enunciado de la investigación	1
1.2. Objeto de la investigación	1
1.3. Exposición del problema	1
1.4. Formulación del planteamiento del problema	7
1.4.1. Problema general	7
1.4.2. Problemas específicos	7
1.5. Justificación de la investigación	8
1.6. Objetivos	9
1.6.1. Objetivo general	9
1.6.2. Objetivos específicos	10



1.7. Hipótesis	10
1.7.1. Hipótesis general	10
1.7.2. Hipótesis específicas	10
1.8. Identificación de las variables de investigación	11
1.9. Diseño del procedimiento metodológico	12
1.9.1. Tipo de investigación	12
1.9.2. Diseño de investigación	12
1.9.3. Población y muestra	13
1.9.4. Técnicas e Instrumentos	14
1.9.5. Proceso de investigación	15
1.9.6. Proceso de tratamiento de datos	16
1.9.7. Proceso de prueba de hipótesis	16
1.10. Marco Conceptual	17

CAPÍTULO II

ORÍGENES DE LA MAGISTRATURA Y EL MINISTERIO PÚBLICO COMO ORGANISMO DE RANGO CONSTITUCIONAL

2.1. Orígenes de la Magistratura	19
2.2. Historia del Ministerio Público	24
2.3. El Fiscal en la doctrina penal	27
2.4. Evolución histórica del Ministerio Público en el Perú	29
2.5. El Ministerio Público y la Acción Penal en el Nuevo Código	



Procesal Penal	34
2.5.1. La acción penal en la doctrina y el derecho penal	37
2.6. Elementos constitutivos de la acción penal	41
2.7. Medios de defensa y la acción penal en el nuevo modelo procesal penal	44
2.8. Formas de conocimiento de la noticia criminal	46
2.9. Conclusión de la investigación Preparatoria y acusación directa	49
2.10. El archivamiento de la investigación preliminar	51
2.11. Impugnación del archivo fiscal y el recurso de elevación de actuados	55

CAPÍTULO III

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONSTITUCION POLITICA DE 1993

3.1. El Ministerio Público como organismo autónomo	60
3.2. El Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción penal	61
3.3. El Ministerio Público y la conducción de la investigación del delito	61
3.4. Facultades del Ministerio Público en la investigación del delito	64
3.5. Rol del Ministerio Público a la luz de la Constitución y el NCPP	65



CAPÍTULO IV

EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ROL FISCAL EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

4.1. Autonomía del representante del Ministerio Público	74
4.1.1. Rol del Fiscal en la investigación penal	75
4.2. Cumplimiento del rol del fiscal en la investigación del delito conforme	
Al artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993	84
4.2.1 Formalización de la investigación preparatoria	85
4.2.2 Etapas de Investigación Preparatoria	90
4.2.3 Características del la Investigación Preparatoria	91
4.2.4 Desarrollo de la Audiencia Preliminar	93
4.2.5 Diligencias en la Investigación Preparatoria	95
4.3. El Ministerio Público y las deficiencias en la investigación preparatoria	98
4.4. El factor de naturaleza jurídica normativa como causa que influye en El actuar deficiente del Ministerio Público	100
4.5. El factor de naturaleza humana y material como causa que influye en el actuar deficiente del Ministerio Público	103
4.6. El factor de naturaleza histórica como causa que influye en el actuar deficiente del Ministerio Público	105



4.7. Factores de naturaleza jurídica, humana y material e histórica que influyen en el actuar deficiente del Ministerio Público	106
4.7.1. El Ministerio Público y la lucha contra la criminalidad	109

CAPÍTULO V

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

5.1. Prueba de hipótesis	129
5.2. Prueba Chi cuadrado	131
Conclusiones	134
Sugerencias	136
Referencias bibliográficas	139
Anexos	149



ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.- El Ministerio Público tiene plena autonomía conforme prescribe el artículo 158º de la Constitución de 1993	113
TABLA 2.- El Ministerio Público y los fiscales en el ámbito de la Provincia de Puno cumplen a cabalidad el mandato del artículo 159º inciso 4 de la Constitución de 1993 referente a la conducción de la investigación	115
TABLA 3.- El Ministerio Público y los fiscales cumplen acertadamente los mandatos expuestos en el Decreto Legislativo N° 052 respecto a la persecución del delito en el ámbito de la Provincia de Puno	117
TABLA 4.- Eficacia de los resultados en la investigación preparatoria Sobre un hecho delictivo que realizan los fiscales en la Provincia de Puno	119
TABLA 5.- El Estado cumple con otorgar al Ministerio Público recursos económicos, personal especializado (Fiscales) e instrumentos técnicos y científicos para facilitar en forma positiva la investigación preparatoria de los Fiscales en la provincia de Puno	121
TABLA 6.- El Ministerio Público cuenta con todos los medios necesarios para cumplir a cabalidad su rol en la investigación preparatoria en el Nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Puno	123

TABLA 7.- El Ministerio Público tiene deficiencias en su rol de investigación previsto por la Constitución y ello influye en la persecución del delito	125
TABLA 8.- Factores de naturaleza jurídica, humano y material	127



ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1.- El Ministerio Público tiene plena autonomía conforme

Prescribe el artículo 158º de la Constitución de 1993 113

GRÁFICO 2.- El Ministerio Público y los fiscales en el ámbito de la Provincia

de Puno cumplen a cabalidad el mandato del artículo 159º inciso 4 de
la Constitución de 1993 referente a la conducción de la investigación 115

GRÁFICO 3.- El Ministerio Público y los fiscales cumplen acertadamente

los mandatos expuestos en el Decreto Legislativo N° 052 respecto a la
persecución del delito en el ámbito de la Provincia de Puno 117

GRÁFICO 4.- Eficacia de los resultados en la investigación preparatoria

sobre un hecho delictivo que realizan los fiscales en la Provincia de Puno 119

GRÁFICO 5.- El Estado cumple con otorgar al Ministerio Público recursos

económicos, personal especializado (Fiscales) e instrumentos técnicos
y científicos para facilitar en forma positiva la investigación preparatoria de
los Fiscales en la provincia de Puno 121

GRÁFICO 6.- El Ministerio Público cuenta con todos los medios necesarios

para cumplir a cabalidad su rol en la investigación preparatoria en el Nuevo
Código Procesal Penal en la Provincia de Puno 123

GRÁFICO 7.- El Ministerio Publico tiene deficiencias en su rol de

investigación previsto por la Constitución y ello influye en la persecución

del delito

125

GRÁFICO 8.- Factores de naturaleza jurídica, humano y material

127





RESUMEN

La tesis que exponemos analiza la importancia del Ministerio Público en el ámbito constitucional y su rol en la investigación preparatoria con la aplicación del nuevo modelo procesal penal en la Provincia de Puno. Para ello, partimos del artículo 158º de la Constitución y la función de este organismo autónomo en la defensa de la legalidad y la persecución del delito; y, por ende la lucha contra la criminalidad a partir de la investigación preparatoria, de acuerdo al sistema acusatorio, garantista y adversarial del nuevo Código Procesal Penal, vigente en nuestra Región a partir del primero de octubre del dos mil nueve. En ese sentido lo que nos interesó es el inciso 4º del artículo 159º de la Carta Fundamental, referida a la conducción de la investigación del delito, que según este artículo está a cargo del Ministerio Público, precisando "conducir desde su inicio la investigación del delito". En tal contexto actualmente son los fiscales los que conducen la investigación, operando directamente con todos los apremios a su alcance. El nuevo código desarrolla de manera específica la intervención del Ministerio Público, tal es así que en los artículos 60º y siguientes se refieren expresamente a las funciones, atribuciones, requerimientos, investigación del delito, el poder coercitivo, entre otros. Empero, en la provincia de Puno, los resultados no son alentadores, esta situación se constató a partir del presente estudio realizado con los profesionales de derecho adscritos al Colegio de Abogados de Puno. Así, un 59% de los abogados encuestados contestaron que los Fiscales no cumplen a cabalidad lo prescrito en el inciso 4º del artículo 159º de la Constitución. En cambio un número que representa el 15% dijo que sí y un 26% relativamente. Igualmente, los abogados en un 60% se pronunciaron en el sentido de que los Fiscales no cumplen adecuadamente sus funciones conforme prescribe el D.L. 052 en cuanto se refiere a la persecución del delito, en cambio respondió en forma positiva el 17 % y dijo relativamente el 23 %.

PALABRAS CLAVES: Ministerio Público, ámbito constitucional, criminalidad, delito, delincuencia, investigación preparatoria, persecución del delito.



ABSTRACT

The thesis of this work analyzes the importance of the Public Prosecutor in the constitutional field and its role in the preliminary investigation to the implementation of the new criminal procedure model in the province of Puno. To do this, we start from the 158th article of the Constitution and the role of this independent body in defense of legality and prosecution of crime; and therefore the fight against crime from the preliminary investigation, according to the accusatory, adversarial system of guarantees and new Criminal Procedure Code, in force in our region from the first of October two thousand and nine. In that sense what interested us is paragraph 4 of article 159th of the Constitution, referring to the conduct of criminal investigations, according to this article is in charge of the Public Ministry, stating "lead from the start investigating the crime". In this context the prosecutors are currently conducting research, working directly with all the constraints at hand. The new code specifically developed the intervention of the Public Ministry, so much so that expressly refer to the functions, responsibilities, requirements, criminal investigations, coercive power, including in articles 60 et seq. However, in the province of Puno, the results are not encouraging, this situation was found from this study with professionals attached right to the Bar of Puno. Thus, 59% of respondents answered lawyers that prosecutors do not fully comply with the requirements of paragraph 4 of article 159th of the Constitution. Instead a number that represents 15% said yes and 26% relatively. Similarly, 60% lawyers spoke in the sense that prosecutors did not adequately fulfill their duties as required by DL 052 as it relates to the prosecution of crime, however responded positively 17% and 23% relative said.

KEYWORDS: Presecutors, constitutional sphere, crime, criminal behavior, crime, preliminary investigation, prosecution of crime.



INTRODUCCIÓN

La tesis desarrollada trata sobre la importancia del Ministerio Público en el ámbito constitucional y su rol en la investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal penal en el Distrito Judicial de Puno. Asimismo, valora el significado del artículo 158º y el inciso 4º del artículo 159º de la norma constitucional respecto a la aplicación del nuevo modelo procesal penal en la investigación preparatoria. Y las causas del deficiente accionar en la investigación preparatoria de parte del Ministerio Público en la persecución del delito en el ámbito de la Provincia de Puno.

Estando vigente la Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto Legislativo Nro 052, en su artículo 11º, establece que: "El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente". Como podemos apreciar de ambos articulados del ordenamiento jurídico, ante la comisión de un hecho punible de carácter público, siempre debe tener la intervención del Ministerio Público, no pueden dirigirse directamente al Juez Penal, lo que significa, que el fiscal tiene el monopolio del ejercicio público de la acción penal.

El Código Procesal Penal de 1991, en su artículo 1º prescribía que: "la acción penal es de naturaleza pública. Su ejercicio corresponde al Ministerio



Público, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley” y, en su Artículo 3º dispone que: “El ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público comprende: el inicio y dirección de la investigación, la acusación y su participación en el juicio oral”. Ahora bien, el nuevo Código Procesal Penal 2004, vigente en nuestra región a partir del primero de octubre del año 2009, dedica un artículo y cuatro incisos específicos a la acción penal: Así señala el Artículo 1.- La acción penal es pública:

- 1) Su ejercicio en los delitos de persecución pública, comprende al Ministerio Público. La ejercerá de oficio a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona natural o jurídica mediante acción popular.
- 2) En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito, ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella.
- 3) En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente.
- 4) Cuando corresponde la previa autorización del Congreso de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la ley para dejar expedita la promoción de la acción penal.



De cuyo contenido podemos advertir que el sujeto pasivo de la acción penal es siempre el Estado, por ello, es que al calificarse la acción de las denuncias formuladas ante la Fiscalía poniendo en conocimiento la comisión de un delito, siempre es exigible un pronunciamiento motivado del Fiscal.

La finalidad del ejercicio público de la acción penal es la materialización de la represión jurídico-penal contra el imputado, esto es el ius puniendi del Estado, siempre que la verdad concreta lograda o la obtención de los elementos probatorios en el proceso penal conduzca a ello. La materialización de la represión jurídico-penal consiste en la imposición de la pena prevista expresamente en la ley penal; pero a veces no es posible concretar la imposición de la pena sino optar por otra solución legal como es la imposición de una medida de seguridad en sustitución de la pena.

De otro lado, es menester tener en cuenta el derecho que le asiste a la parte imputada de ejercer los medios de defensa, destinados a salvaguardar los derechos del imputado y a paralizar el ejercicio de la acción penal. En el Derecho procesal penal, los medios técnicos de defensa, engloban a todos aquellos obstáculos, legales que concede la ley, para defenderse de una imputación, estos son las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y las excepciones.

Desde otro ángulo, en la tesis también se desarrolla el tema de la investigación preparatoria, a la que se puede definir como un acto no jurisdiccional y unilateral del titular del ejercicio público de la acción penal (Fiscal) que determina el inicio de una investigación formal contra determinada

persona, cumpliendo una función de garantía, puesto que permite al imputado un conocimiento cierto de la imputación y comienza, inevitablemente, la actividad de su defensa.

En el nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal tiene, ante el conocimiento de la noticia criminal, varias posibilidades de actuación: a) Investigar por sí mismo, que implicaría realizar algunas diligencias de indagación en su Despacho y, b) Requerir a la policía para que realice las diligencias preliminares bajo su dirección. En ese caso se elaborará un informe policial.

Efectuadas las diligencias preliminares, el fiscal evaluará los requisitos de procedibilidad, siendo posible que adopte las siguientes determinaciones: a) Si el hecho denunciado no es delito, no es-justiciable penalmente, o existen causa de extinción de la acción penal, declarará que no procede formalizar investigación y dispondrá el archivo de lo actuado; b) Si no se ha individualizado o identificado a los presuntos autores o partícipes, ordenará la intervención de la policía para dicho fin; c) Si falta un requisito de procedibilidad que depende del denunciante, reservará la investigación provisionalmente. Si el agraviado o denunciante no está de acuerdo con la decisión del Fiscal de archivar las actuaciones o reservarlas provisionalmente, requerirá al Fiscal para que en el plazo de cinco días eleve las actuaciones al Fiscal Superior.

Ante la decisión del archivo de la denuncia, el Fiscal está impedido de promover una investigación preparatoria por los mismos hechos, salvo que existen nuevos elementos de convicción o no se haya realizado una debida investigación. En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional peruano,



que indicó que si bien las decisiones de la fiscalía no están revestidas de la calidad de cosa juzgada, sí tienen la calidad de cosa decidida, siendo factible que sólo cuando la investigación presente un déficit o falta de elementos de prueba se pueda reabrir la investigación preliminar (STC. N° 2725-2008-HC/TC).

La formalización de la investigación constituye un acto de promoción o de impulso de la investigación preparatoria, que contiene la imputación, pero no la pretensión punitiva, pues, ésta recién se plantea en la acusación con un suficiente caudal probatorio. La imputación es la atribución de la comisión del hecho que la ley penal califica como delito a una o varias personas. Debe precisar los hechos, debe contener todo aquello que constituye delito, sin recortes ni limitaciones y sin omitir a ninguno de los autores o partícipes.

La tesis, guarda relación con la estructura que expone el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado y, para cuyo fin, se la ha estructurado en capítulos. El primer capítulo expone el problema y procedimiento metodológico respecto al desarrollo de la investigación. El segundo capítulo, trata sobre el estudio acerca de los orígenes de la Magistratura y el Ministerio Público como organismo de rango constitucional. El tercer capítulo abarca el análisis del Ministerio Público y la Constitución Política de 1993. El cuarto capítulo efectúa un análisis del Ministerio Público y el rol fiscal en el Nuevo Modelo Procesal Penal. El quinto capítulo abarca los resultados de la investigación. Como es norma, la Tesis culmina con conclusiones y sugerencias.



CAPÍTULO I

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA Y PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN

“Importancia del Ministerio Público en el ámbito constitucional y su rol en la investigación preparatoria con el nuevo modelo procesal penal, Puno 2011 – 2012”.

1.2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Profundizar y desarrollar el estudio acerca de la importancia del Ministerio Público y su rol en la investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal penal en la Provincia de Puno durante el período 2011 y 2012.

1.3. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

Desde el punto de vista histórico, fue la Constitución de 1979 que por primera vez en la historia del Perú incorporó al Ministerio Público



como ente autónomo, pues, anterior a ella, este organismo del Estado formaba parte del Poder Judicial. Cuando se propuso la necesidad de cambiar de modelo se planteó reformular para que las fiscalías, que mucho antes había existido en la administración de justicia hasta 1975, a partir de un debate en la Asamblea Constituyente de 1978. En este debate, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, fue la que planteó que el Ministerio Público no fuera separado de la organización interna del Poder Judicial, tal como, lo había sido antes.

Sin embargo, en la gestación la Asamblea Constituyente primó el criterio de otorgarle al Ministerio Público autonomía, en los términos que prescribe la Constitución de 1979 y esta posición fue ratificada el artículo 158º de la Constitución de 1993. Fue el presidente Fernando Belaunde Terry, quien expidió uno de los primeros Decretos Legislativo, el N° 051, por el cuál, se daba nacimiento al Ministerio Público bajo una nueva orientación y dimensión jurídica. No obstante, el contenido de la Ley Orgánica del Ministerio Público y los efectos positivos, fue víctima de muchas críticas y falta de recursos económicos, lo que retrasó su adecuada implementación para el cumplimiento de sus fines.

El artículo 158º de la Constitución Política del Estado establece que el Ministerio Público es autónomo. La autonomía implica la necesidad de mantener alejado del poder político oficial y del poder fáctico. Luego también, cumple labores realizando investigaciones acompañando permanentemente a la labor de los magistrados del Poder Judicial y, ejercitando derechos diversos de intervención dentro los procesos. Más



allá de los casos aislados que comprometen su función, el Ministerio Público es importante en la defensa de la legalidad y del ciudadano en una sociedad democrática. Su papel es más protagónico en la medida que se va implementando el sistema acusatorio en el nuevo modelo procesal penal y con las innovaciones que trae consigo.

Asimismo, el artículo 159º de la Constitución prescribe todo lo concerniente a sus atribuciones y funciones. Esta norma, casi similar al artículo 250º de la Carta Fundamental de 1979. Sobre la base de las normas establecidas en la Constitución vigente, se ha modelado su Ley Orgánica y el nuevo modelo procesal penal. Según esta norma, para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público a través de sus fiscales, está autorizado a ejercitar los recursos, acciones y actuar las pruebas que admiten la legislación administrativa y judicial.

En relación al tema de investigación, lo que más nos interesa es el inciso 4º del artículo 159º de la Carta Fundamental, es decir, la conducción de la investigación del delito, que está a cargo del Ministerio Público. Esta norma expresa: "conducir desde su inicio la investigación del delito". Hay, pues, una diferencia sustantiva, originada por la configuración de los verbos vigilar-establecida en la Constitución de 1979- y conducir –en la Constitución de 1993- Hoy, son los fiscales que tienen a cargo conducir la investigación, en la cual deben actuar haciendo efectivo todos los apremios que le franquea la ley. El nuevo modelo procesal penal desarrolla de modo más específico la intervención del Ministerio Público. Los artículos 60º y siguientes se refieren expresamente acerca de las



funciones, atribuciones, requerimientos, investigación del delito, el poder coercitivo, entre otros.

Estas funciones y atribuciones, deben ser compatibles con el rol que le ha asignado la Constitución, esto es, la persecución del delito y por ende la lucha contra la criminalidad. Ahora bien, para hacer frente a estos problemas requiere de un esfuerzo denodado, sostenido y estratégico por parte del Estado Peruano y sus instituciones, especialmente de parte del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Desde esta perspectiva, la prevención y persecución del delito, así como la protección de las víctimas, requieren contar con información confiable, oportuna y de calidad que sirva de sustento para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas enfocadas en dichos problemas. Ante este panorama, la investigación del delito de parte de los Fiscales es crucial para indagar, descubrir y acusar contra quienes delinquen.

Ahora bien, aún cuando se evidencia las dimensiones del incremento de la criminalidad en todo el país, nos parece también evidente que el trabajo que se hace para combatir o en su caso perseguir el delito es deficiente, ello porque existen serias dificultades en cuanto se refiere al proceso mismo de la investigación del delito a cargo de los Fiscales. Máxime si, actualmente para que el Juez pueda imponer una pena, no basta con tomar conocimiento que se cometió un delito, sino saber: quién lo cometió, cómo lo cometió, dónde lo realizó, por qué razón o móviles y cuándo fue. Es decir, el delito es verificar al delincuente y a la víctima. Para cumplir a satisfacción el rol asignado por la Constitución, la



Ley Orgánica del Ministerio Público y el nuevo Código Procesal Penal, entre otras normas afines, es preciso delimitar el significado e importancia de la investigación preparatoria entre una de las funciones básicas de los Fiscales.

En ese sentido, se puede definir la investigación preparatoria como un acto no jurisdiccional y unilateral del titular de la acción penal (el Fiscal) que determina el inicio de una investigación formal contra determinada persona, cumpliendo una función de garantía, puesto que permite al imputado un conocimiento cierto de la imputación y comienza, inevitablemente, la actividad de su defensa. En el nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal tiene, ante el conocimiento de la noticia criminal, varias posibilidades de actuación: a) Investigar por sí mismo, que implicaría realizar algunas diligencias de indagación en su Despacho; y b) Requerir a la policía para que realice las diligencias preliminares bajo su dirección. En ese caso se elaborará un informe policial.

Efectuadas las diligencias preliminares, el Fiscal evaluará los requisitos de procesabilidad adoptando las posibles siguientes determinaciones:

- Si el hecho denunciado no es delito, no es justiciable penalmente, o existen causa de extinción de la acción penal, declarará que no procede formalizar investigación y dispondrá el archivo de lo actuado.
- Si no se ha individualizado o identificado a los presuntos autores o partícipes, ordenará la intervención de la policía para dicho fin.



- Si falta un requisito de procedibilidad que depende del denunciante, reservará la investigación provisionalmente. Si el agraviado o denunciante no está de acuerdo con la decisión del Fiscal de archivar las actuaciones o reservarlas provisionalmente, requerirá al Fiscal para que en el plazo de cinco días eleve las actuaciones al Fiscal Superior. Ante la decisión del archivo de la denuncia, el fiscal está impedido de promover una investigación preparatoria por los mismos hechos, salvo que existan nuevos elementos de convicción o no se haya realizado una debida investigación.
- Si, de acuerdo con el artículo 336º del nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal tiene indicios reveladores de la existencia del delito, la acción no ha prescrito, se ha individualizado al imputado, y se ha satisfecho los requisitos de procedibilidad en los casos que lo requiera, dispondrá la formalización de la investigación preparatoria. Esta decisión es fundamentalmente de carácter estratégico, dado que ofrece el Fiscal la posibilidad de obtener autorizaciones judiciales para medidas o diligencias que suponen una restricción importante de los derechos del imputado.

La formalización de la investigación constituye un acto de impulso de la investigación preparatoria, contiene la imputación que debe guardar rigurosidad en cuanto a la atribución de un hecho concreto al sujeto pasivo, pero no la pretensión punitiva, pues, ésta recién se plantea en la acusación con suficiente caudal probatorio, acusación que obviamente es la consecuencia de una buena y adecuada investigación preparatoria. La

imputación es la atribución de la comisión del hecho que la ley penal califica como delito a una o varias personas.

Debe precisar los hechos, debe contener todo aquello que constituye delito, sin recortes ni limitaciones y sin omitir a ninguno de los autores o partícipes. Bajo esa óptica, la presente investigación se avocará al análisis del espíritu del contenido de la norma constitucional y la importancia del Ministerio Público en relación con la aplicación del nuevo modelo procesal penal en la Provincia de Puno.

1.4. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las dimensiones del problema se expresan en los siguientes interrogantes:

1.4.1. PROBLEMA GENERAL

- a) ¿Es importante el Ministerio Público en el ámbito constitucional previsto en los artículos 158 y 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993 y en su rol de Investigación Preparatoria en el Nuevo Modelo Procesal Penal tiene deficiencias en la persecución del delito, en la Provincia de Puno, años 2011-2012?.

1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- a. ¿Es importante el rol del Ministerio Público en el ámbito constitucional previsto en los artículos 158 y 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993?
- b. ¿Cuáles son las causas del deficiente accionar en la Investigación Preparatoria de parte del Ministerio Público en la persecución del delito?

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta de investigación consideramos que es importante por lo siguiente:

- a) Se pretende profundizar los estudios sobre la importancia del Ministerio Público desde el ámbito constitucional a partir de la puesta en vigencia del nuevo modelo procesal penal, a partir del primero de octubre del 2009 en nuestra región Puno.
- b) Se requiere profundizar las limitaciones de los fiscales en la etapa de la investigación preparatoria e identificar los factores que tienen incidencia en la deficiente persecución del delito y por ende el incremento de la criminalidad en la ciudad de Puno.
- c) En la persecución del delito tiene un papel preponderante el Ministerio Público a través de los Fiscales, así como la Policía Nacional, particularmente en la investigación preparatoria.

- d) Para garantizar las óptimas condiciones del éxito de la investigación criminal es necesario contar con Fiscales idóneos en el conocimiento de las técnicas básicas de criminalística y que cumplan a cabalidad el mandato constitucional y normas afines.
- e) Del ejercicio del cargo de Fiscales depende el éxito de la investigación, porque en gran medida tiene vinculación directa con la incidencia de la criminalidad, por cuanto, la falta de experiencia en investigación criminal redunda en la ineficacia en la investigación de delitos. En este caso, no se estaría cumpliendo la Constitución Política, Decreto Legislativo 052 y Código Procesal Penal.

1.6. OBJETIVOS

El objetivo general y los objetivos específicos en la presente investigación jurídica son:

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la importancia del Ministerio Público en el ámbito constitucional previsto en los artículos 158 y 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993 e identificar si en su rol de Investigación Preparatoria en el Nuevo Modelo Procesal Penal tiene deficiencias en la persecución del delito, en la Provincia de Puno, años 2011-2012.



1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Analizar la importancia del Ministerio Público en el ámbito constitucional previsto en los artículos 158 y 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993.
2. Identificar las causas del deficiente accionar en la Investigación Preparatoria de parte del Ministerio Público en la persecución del delito.

1.7. HIPÓTESIS

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL

El Ministerio Público es importante en el ámbito constitucional previsto en los artículos 158 y 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993 y en su rol de Investigación Preparatoria en el Nuevo Modelo Procesal Penal tiene deficiencias en la persecución del delito, en la Provincia de Puno, años 2011-2012.

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. El Ministerio Público es importante en el ámbito constitucional previsto en los artículos 158 y 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993.

2. Existen causas del deficiente accionar en la Investigación Preparatoria de parte del Ministerio Público en la persecución del delito.

1.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DEL PROBLEMA: INVESTIGACIÓN CAUSAL EXPLICATIVA

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
1.INDEPENDIENTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL AMBITO CONSTITUCIONAL.	1.1 El Ministerio Público y la Constitución política de 1993. 1.2 Orígenes de la Magistratura y el Ministerio Público como organismo de rango constitucional.	1.1.1. El Ministerio Público como organismo autónomo. 1.1.2 El Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción penal. 1.1.3. El Ministerio Público y la conducción de la investigación del delito. 1.1.4. Facultades del Ministerio Público en la Investigación del delito. 1.1.5 Rol del Ministerio Público a la Luz de la Constitución y el NCPP. 1.2.1. Orígenes de la Magistratura 1.2.2. Historia del Ministerio Público 1.2.3. El Fiscal en la doctrina Penal 1.2.4. Evolución histórica del Ministerio Público en el Perú 1.2.5. El Ministerio Público y la acción Penal en el Nuevo Código procesal Penal. 1.2.6. Elementos Constitutivos de la Acción Penal. 1.2.7 Medios de defensa y la acción penal en el nuevo Modelo Procesal Penal. 1.2.8. Formas de Conocimiento de la Noticia Criminal 1.2.9. Conclusión de la investigación Preparatoria y acusación directa. 1.2.10. El Archivamiento en la investigación Preparatoria. 1.2.11 Impugnación del Archivo Fiscal y el recurso de elevación de actuados
2. DEPENDIENTE ROL EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL	2.1. El Ministerio Público y el rol del fiscal en el Nuevo Modelo Procesal Penal	2.1.1.- Autonomía del representante del Ministerio Público. 2.1.2.- Cumplimiento del Rol del Fiscal en la Investigación del delito, conforme al artículo 159 inciso 4 de la Constitución de 1993. 2.1.3.- El Ministerio Público y las deficiencias en la Investigación Preparatoria. 2.1.4.- El factor de orden jurídico como causa que influye en el actuar deficiente del Ministerio Público. 2.1.5.- El factor de orden humano y material como causa que influye en el actuar deficiente del Ministerio Público. 2.1.6.- El factor de orden histórico como causa que influye en el actuar deficiente del Ministerio Público 2.1.7.- Factores de naturaleza, jurídica, humana, material e histórica que influyen en la deficiencia del Ministerio Público en la persecución del delito. 2.1.8.- Factores de naturaleza, jurídica, humana, material e histórica que influyen en el Ministerio Público en su rol constitucional de conducir la investigación del delito.

1.9. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación será cuantitativa, y según la naturaleza y nivel o jerarquía es de tipo causal explicativo, en el área del Derecho Constitucional con relación a la aplicación del Nuevo Modelo Procesal Penal.

1.9.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Tratándose de una investigación de tipo explicativo en que se considera la relación causal de dos variables, por tanto se utiliza el siguiente diseño de investigación, cuyo modelo se expresa en la siguiente ecuación:

$$Y = f(x)$$

Donde:

Y= Variable Dependientes = - Rol en la Investigación Preparatoria
en el Nuevo Modelo Procesal Penal

X= Variable Independiente= El Ministerio Público en el Ámbito Constitucional

F= Función = Nexos =Influye

Este diseño significa que se va investigar por separado cada

una de las variables involucradas para luego, a través de un modelo estadístico, demostrar que la Constitución Política del Estado regula el rol del Ministerio Público; sin embargo, el rol de este organismo autónomo tiene deficiencias en la investigación Preparatoria y en la persecución del delito en el Nuevo Modelo Procesal Penal en la Provincia de Puno.

1.9.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.9.3.1. POBLACIÓN

La población está comprendida por la totalidad de abogados que forman parte del Colegio de Abogados de Puno, que hacen un total de 4000 abogados agremiados, de cuyo número se toma en cuenta la muestra correspondiente y se trabajará en el presente estudio.

1.9.3.2. MUESTRA

Teniendo en cuenta que la población es grande, es pertinente trabajar con muestra de 200 abogados encuestados, el que se obtuvo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N \cdot (Z)^2 \cdot p \cdot q}{d^2 \cdot (N-1) + (Z)^2 \cdot p \cdot q}$$

En donde:

N= tamaño de la población

Z= nivel de confianza

P= probabilidad de éxito o proporción esperada.

q= probabilidad de fracaso

d²= precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

$$n = \frac{400 \times (1.96)^2 \times 0.05 \times 0.95}{0.03^2 \times (4000 - 1) + (1.96)^2 \times 0.05 \times 0.95}$$

$$n = 193$$

De cuya ecuación resulta que la muestra corresponde a 193 y considerando el redondeo correspondiente, trabajaremos con una muestra de 200 encuestados, para poder tener una seguridad del 95%.

1.9.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas o instrumentos de recolección de datos que se utilizaron se detallan a continuación:

Técnica: Para el análisis de la información se utilizó la técnica de la investigación documental o análisis documental, ello para las variables ámbito constitucional y Ministerio Público; y, para la variable investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal penal la técnica de la encuesta.

Instrumento: En el presente estudio se utilizó como instrumento de investigación la matriz o ficha de análisis documental para la variable Ministerio Público en el ámbito constitucional; y, para la variable investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal penal la técnica del cuestionario. (Anexos)

La matriz de análisis documental se utilizó para recoger los datos correspondientes a la revisión de la doctrina y el ordenamiento jurídico; y, el cuestionario para el desarrollo de los indicadores y para la extracción de un dato exacto (Anexos)

1.9.5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El procedimiento que se siguió para recoger los datos es como sigue:

Primero.- Elaborar los instrumentos de investigación en la cantidad correspondiente a la población y muestra determinada.

Segundo.- Se verificó el número de abogados agremiados al Ilustre Colegio de Abogados de Puno.

Tercero.- Se realizó el análisis de la doctrina y el ordenamiento jurídico de cada uno de los temas, para la aplicación de los instrumentos.

Cuarto.- Se aplicó los instrumentos de investigación de acuerdo a un cronograma preestablecido.

Quinto.- Se organizó los datos recogidos para su tabulación y sistematización.

1.9.6. PROCESO DE TRATAMIENTO DE DATOS

Los datos recogidos fueron abordados de la siguiente manera:

Primero.- Se tabularon, después de haberse ponderado y calificado cada instrumento de investigación.

Segundo.- Se elaboraron los cuadros de distribución porcentual.

Tercero.- Para los cuadros generales se elaboraron gráficos de ilustración.

Cuarto.- Los cuadros estadísticos fueron analizados, interpretados y discutidos en función del marco teórico asumido y considerando los objetivos de investigación.

1.9.7. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS

Finalmente se procedió con la prueba de hipótesis a través del modelo estadístico de la chi cuadrada calculada.

El procedimiento de la prueba de hipótesis fue de la siguiente manera:

a) Determinación de la hipótesis estadística.

b) Nivel de significancia y margen de error que se asume: $\alpha =$

0.05

c) Grados de Libertad que se trabajó

d) Prueba estadística que se tomó en cuenta.

e) Regla de Decisión que se asumió.

1.10. MARCO CONCEPTUAL

1.10.1. MINISTERIO PÚBLICO.- Organismo Constitucional autónomo a cargo de la conducción de la investigación como titular del ejercicio público de la acción penal.

1.10.2. ÁMBITO CONSTITUCIONAL: Para el presente trabajo está constituido por el contenido de la Constitución Política del Estado respecto al Ministerio Público.

1.10.3. CRIMINALIDAD.- Cantidad o proporción de los crímenes cometidos en un lugar y un tiempo determinado.

1.10.4. DELITO.- Es acción típica, antijurídica, punible y culpable. Hecho ilícito sancionado por la ley con una pena.

1.10.5. DELINCUENCIA.- Conjunto de crímenes y delitos en un tiempo y espacios determinados; comisión de delitos.



1.10.6. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.- Es la primera etapa del proceso y está dirigida a reunir los elementos de convicción necesarios para establecer la existencia del delito y la responsabilidad. Es la etapa de preparación para el ejercicio de la acción penal. Se caracteriza principalmente por la búsqueda de evidencia y la preparación de medios de prueba de cargo y de descargo. En el juzgamiento, en cambio, predomina la actividad de control, debate y valoración.

1.10.7. PERSECUCIÓN DEL DELITO.- Rol del Ministerio Público para buscar la sanción de un delito o buscar una sentencia condenatoria.



CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

ORÍGENES DE LA MAGISTRATURA Y EL MINISTERIO PÚBLICO COMO ORGANISMO DE RANGO CONSTITUCIONAL

2.1. ORÍGENES DE LA MAGISTRATURA

es.wikipedia.org/wiki/. En la antigua Roma, los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera unida o por separado. Los magistrados eran esencialmente los cónsules, procónsules, pretores, ediles, tribunos y los censores. En la época del principado y, más tarde, del dominado, los magistrados fueron perdiendo poder efectivo.

es.wikipedia.org/wiki/. Se llama magistratura romana a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales, en la antigua Roma, se investía a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones



relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. En la República romana, finalizada la monarquía (año 509 a. C.), el lugar del rey fue ocupado por dos magistrados a los que se llamó primero pretores y luego cónsules.

Según la tradición romana, la aristocracia, para evitar los abusos en que habían incurrido los antiguos reyes, estableció una serie de medidas limitantes al poder de los nuevos oficiales. Así, se dispuso que cada uno tuviera veto sobre la decisiones del otro (*intercessio*); que gobernarán sólo por un año; que las penas o castigos que impusieran pudieran ser apeladas ante las asambleas del pueblo (*provocatio ad populum*) y que, una vez terminado su mandato, fueran responsables por los actos contrarios a la ley que hubiesen podido cometer en el cargo. Con el tiempo, las funciones de los cónsules se disgregaron en una serie de nuevas magistraturas, a saber: la cuestura (447 a. C.); la censura (443 a. C.); la pretura urbana (367 a. C.); la edilidad (365 a. C.) y la pretura peregrina (242 a. C.). Todas ellas compartían las características de ser colegiadas, temporales y responsables.

- Dicha magistraturas constituían el gobierno regular de la ciudad, y por ello eran llamadas ordinarias. Frente a ellas, atendiendo la necesidad de contar con una conducción unitaria y firme para los períodos de crisis, se creó la dictadura (en torno al año 500 a. C.), la cual fue incorporada a la constitución republicana con el carácter de magistratura extraordinaria. Otras magistraturas de igual carácter, pero de existencia restringida a determinados períodos de la



República, fueron: el decenvirato y el triunvirato. Las magistraturas ordinarias eran las que regían en tiempos de normalidad. Se accedía a ellas de acuerdo al cursus honorum, cuya forma definitiva quedó establecida, en el año 180 a. C., por la ley Villia annalis.

Eran características comunes de las magistraturas ordinarias:

- La colegiabilidad: Eran ejercidas, a la vez, por más de una persona (dos, por regla general). Cada una de la cuales tenía la facultad de vetar (*intercessio*) las decisiones de la otra; facultad negativa, ya que sólo implicaba paralizar la actividad del colega, en ningún caso reemplazar o modificar sus decisiones.
- La electividad: Su ejercicio implicaba la previa elección del magistrado por parte de los comicios centuriados, en el caso de los magistrados mayores (censores, cónsules y pretores), o de los comicios tribunados, tratándose de magistrados menores (ediles y cuestores).
- La gratuidad: Eran ejercidas gratuitamente; por el sólo honor que implicaba desempeñar el cargo (ad honorem).
- La temporalidad: Su ejercicio estaba limitado en el tiempo. Por regla general, duraban un año; en el caso de la censura, 16 meses. No era posible la reelección inmediata (iteratio), salvo, también, en el caso de la censura.



- La gradualidad: En su conjunto, formaban un sistema jerárquico determinado por el mayor o menor poder (potestas) que la constitución les otorgaba a cada una. En razón del grado, el magistrado superior podía vetar las decisiones del inferior. Además, tal jerarquía, determinaba el curso que debía seguir la carrera del político romano (véase cursus honorum).
- La responsabilidad: Su ejercicio implicaba, para su poseedor, responder por las infracciones a las leyes que hubiese podido cometer en el cargo. Los magistrados mayores respondían al terminar su mandato; los menores, durante el ejercicio del mismo.

Los requisitos para ocupar el cargo de magistrado fueron distintos según la época. En un principio, se requería pertenecer al orden patricio. Sólo gradualmente los plebeyos lograron ser admitidos al ejercicio de las diferentes magistraturas. Proceso que culminó cuando, en virtud de las leyes Licinias (año 367 a. C.), se estableció que una de las plazas para el consulado debía ser ocupada necesariamente por un plebeyo.

En el año 180 a. C., la ley Villia annalis estableció que debía transcurrir un tiempo mínimo de dos años para pasar de una magistratura a otra y diez años para volver a ejercer el consulado. También señaló la edad mínima para desempeñar el consulado (42 años), la pretura (39 años) y la edilidad (36 años). Previo al ejercicio de las magistraturas, todo aspirante a seguir una carrera política, debía entrenarse en alguno de los veintiséis cargos menores que comprendía el vigintisexvirato. Por otra



parte, era requisito para integrar el senado, el haber desempeñado alguna magistratura. Los ex magistrados con imperium (pretores y cónsules) quedaban habilitados para ser designados por el senado para el gobierno de una provincia, en calidad de procónsules o propretore.

Las magistraturas ordinarias eran mayores y menores, según la elección del magistrado dependiera, respectivamente, de los comicios centuriados o de los comicios tribunados. Magistraturas mayores eran: el consulado y la pretura; menores: la censura, la edilidad y la cuestura.

Las magistraturas extraordinarias eran aquellas que regían en períodos de anormalidad provocados ya fuera por causas externas (por ejemplo: una guerra que pusiera en peligro la existencia de Roma) o internas (por ejemplo: una conjuración que pusiera en peligro las instituciones republicanas). Eran, en orden de aparición histórica:

- La dictadura, que involucraba el nombramiento de un dictador el cual, a su vez, designaba a un magister equitum.
- El decemvirato.
- El triunvirato. Si bien se discute su calidad de magistratura.

Los magistrados tenían los siguientes poderes o potestades:

- Potestas: capacidad de mando inherente al cargo que capacita para dar órdenes. Sus elementos: Intercessio: oposición a la decisión de un colega.

- Derecho a representar a la república ante un particular como en una firma.
- Auspicium: derecho de buscar la aprobación de los dioses. Obligatoriedad de consultar los auspicios en nombramientos, en guerra y comicios.
- Imperium: dos clases, el militar que ejercen los magistrados fuera de la ciudad; comprende la administración de los territorios conquistados, convocar al ejército y acuñar moneda para el ejército. El imperium domi es el que se ejerce dentro de la ciudad, cuyo atributo principal es el derecho a la coacción: derecho a actuar de forma ejecutiva y judicial si un subordinado no acataba las órdenes.
- Iurisdictio: poder para intervenir en asuntos judiciales.

2.2. HISTORIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Flores (1999). El Ministerio Público, tal como actualmente es conocido en el Derecho Continental europeo y en América Latina, ha sufrido a lo largo de la historia una dilatada evolución que, en síntesis, guarda estrecha relación con la consolidación de la defensa pública de la legalidad y el tránsito de la acción popular relacionada con el modelo acusatorio puro o clásico al procedimiento de oficio.

Existen autores que creen encontrar en Grecia y Roma remotos antecedentes de la institución del Ministerio Público. Así, para algunos, el



llamado *advocatus fisco romano*, funcionario de confianza del Emperador que se encontraba de sostener la acusación en los tribunales en materia de infracciones fiscales, presentaría alguna similitud con la figura del fiscal contemporáneo. Otros pretenden encontrar el antecedente remoto del Ministerio Público en los *tesmotéti* o *desmodetas* griegos que, además de cumplir la función de vigilancia de las leyes, en determinados casos de real trascendencia para la República y supletoriamente a la acción popular ejercida por los ciudadanos, también podían sostener la acusación pública.

Finalmente, hay quienes como De Miguel, Jannaccone y otros autores italianos citados por Flores Prada, se remota inclusive hasta el antiguo Egipto, creyendo ver el antecedente milenario de la función fiscal en aquellos funcionarios que, entre otras atribuciones, tenían la de intervenir en los procedimientos de averiguación de la verdad, una suerte de inspectores que se remontarían a la época de la dinastía tolemeica.

Durante la Edad Media, probablemente bajo la influencia del Derecho Romano concretada en la figura de funcionarios como el *advocatus fisco*, y en vista de la cada vez más creciente intervención del Poder en la solución de los conflictos sociales, se erigió como una necesidad el establecimiento de un órgano público que se encargara de sostener las pretensiones ante los Tribunales.

Estos funcionarios, llamados procuradores fiscales, promotores fiscales o actores del fisco, eran nombrados por los reyes,



fundamentalmente para la defensa de la hacienda o patrimonio regio en los pleitos, especialmente para la percepción de las multas impuestas como consecuencias de la condena penal, función que, posteriormente, se fue ampliando hasta comprender la intervención en la represión de los delitos a través de las acusación.

Esta evolución tuvo que ver con la asunción del procedimiento de oficio y el modelo inquisitivo canónico en los que el denunciante fue paulatinamente sustituido por el Fiscal.

Es en Francia, donde surge el Ministerio Público moderno. En efecto, tras sufrir una larga evolución histórica durante la Edad Media, que terminó en la fusión de la institución de los abogados del Rey y de los Procuradores del Rey (ambos representaban los intereses regioes, pero los primeros tenían una connotación procesal, mientras que los segundos cumplían funciones administrativas), el Ministerio Público finalmente terminó su configuración moderna después de la Revolución, cuando Napoleón asume todos los poderes y organiza la institución.

No obstante, esta configuración aun seguía siendo ambigua, toda vez que sus integrantes, por un lado eran magistrados que actuaban con autonomía, y por otro, dependían jerárquicamente del Poder Ejecutivo. Es esta institución, organizada de este modo por ley del 20 de abril de 1810, la que fue recogida por las legislaciones de los demás países europeos y fundamentalmente a través de España, es importada a Latinoamérica.

2.3. EL FISCAL EN LA DOCTRINA PENAL

es.wikipedia.org/wiki/Fiscal. Según la doctrina, el Fiscal es el funcionario público (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública. Es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente las funciones y atribuciones de éste, en los casos que conoce. El Fiscal es la parte que acusa dentro de un proceso penal. Cuando se denuncia un delito, el Fiscal es la persona que debe presentar las pruebas ante el Juez para que ese delito se castigue.

Es un abogado del Estado, no de la víctima, el desconocimiento de este hecho puede dar lugar a ciertos conflictos por lo que es deseable aportar esta información. Si bien el Ministerio Público otorga las responsabilidades de protección de víctimas y testigos a la fiscalía, ello no implica que el fiscal sea su abogado. El Juez es el que determina si un acusado es o no culpable tomando como base las pruebas que presenten ambas partes, el denunciante, por medio del Fiscal, y el acusado, a través de su defensor. Si el Juez dictamina que un acusado es culpable, también dicta la Sentencia.

Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de Fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de éstos en sus tareas y funciones. A su vez,



su asignación territorial está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio. Los Fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un Fiscal asuma la atención del caso (o, también, puede ser asignado a uno de mayor rango jerárquico).

Además, un Fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causal legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho. Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito civil, penal y disciplinario.

No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.

Asimismo, generalmente, la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la constitución o la ley.

2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PERÚ

es.wikipedia.org/wiki/Ministerio. La asimilación de los miembros del Ministerio Público al aparato judicial se mantuvo durante la época republicana. Desde la instalación de la Alta Cámara de Justicia y la creación de la Corte Suprema (1825) el Ministerio Público siempre estuvo al lado de los jueces. Los Reglamentos de Organización de los Tribunales no lo mencionaban como un organismo. En la evolución legislativa del Estado Peruano, constitucionalmente, no fue regulada la actividad del Ministerio Público en forma clara y nítida hasta la Constitución de 1979.

En la Constitución de 1823, en el capítulo pertinente al Poder Judicial, artículos 95º al 137º, no hay referencia del Ministerio Público. La Constitución de 1826 solo regulaba la existencia de un Fiscal a nivel de la Corte Suprema. En el Estatuto político de 1828 se precisaba que la Corte



Suprema estaba constituida por siete vocales y un Fiscal, Las Cortes Superiores también deberían tener un Fiscal, luego hace mención a los Agentes Fiscales, deduciéndose que su competencia era a nivel de primera instancia.

La Constitución de 1834 hacía mención al Fiscal de la Corte Suprema y los mismos requisitos se exigían tanto para ser Vocal y Fiscal. Igual hace referencia a los Fiscales de las Cortes Superiores y Agentes Fiscales. En la Constitución de 1839, se regula a los Fiscales de la Corte Suprema, de la Corte Superior y Agentes Fiscales a nivel de los Juzgados de Primer Instancia; tampoco hay precisión de atribuciones.

portal.mpf.n.gob.pe. La Convención de 1855 aprobó la Ley sobre organización del Ministerio Público, cuyas funciones son resumidas por el historiador Jorge Basadre: "aparte de la supervigilancia del Poder Judicial y, en especial (se refería al Fiscal de la Nación) sobre los Fiscales de las Cortes y Agentes Fiscales, le correspondía dictaminar en los asuntos y casos que le competían según la Ley de Ministros; cuidar que todo funcionario público cumpliera la Constitución y las leyes; dar parte al Congreso sobre las infracciones de cualquier funcionario de la República, inspeccionar las oficinas del Estado y todo establecimiento público o corporación legal sin excepción alguna, dando parte de los abusos y de las transgresiones de las normas legales y reglamentarias; cautelar que las elecciones populares se verificaran con plena libertad y en los tiempos designados". Aparte de ello, durante mucho tiempo, al Ministerio Público se le mantuvo como defensor del Estado en juicios.



En la Carta Magna de 1856, expedida durante el Gobierno de Ramón Castilla, se hacía una referencia más clara a un Fiscal de la Nación, Fiscales de las Corte Superiores y Agentes Fiscales a nivel de Juzgados de Primera Instancia. Tampoco se precisaron competencias. La Constitución de 1860 igualmente regula al Ministerio Público y se hace referencia a los Fiscales de la Corte Suprema, Cortes Superiores y Juzgados, así como su forma de nombramiento, sin precisar atribuciones.

Es preciso acotar que bajo los lineamientos jurídico-políticos de la indicada Constitución de 1860, por primera vez y el año de 1863, se promulgaron y entraron en vigencia los Códigos Penal y el de Enjuiciamiento en Materia Penal. En este último ya se legislaba y regulaba jurídicamente acerca del Ministerio Público. Los Fiscales son considerados como titulares de la acción penal conjuntamente con los agraviados.

La Constitución de 1869 fue efímera. Por ello, la Carta Magna de 1860 tuvo vigencia hasta 1920, año en que fuera aprobada la nueva Constitución Política por la Asamblea Nacional, durante el Gobierno de Augusto B. Leguía. En esta Carta Política se hizo referencia normativa a los Fiscales de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores y a los Agentes Fiscales de los Juzgados de Primera Instancia, sin precisarse las competencias, por lo menos genéricas

El 2 de enero de 1930 también se promulgó el nuevo Código de Procedimientos en Materia Criminal. En el artículo 2º se precisó con suma



claridad que el ejercicio de la acción penal era pública, siendo asumida por el Ministerio Fiscal; su organización, constitución, competencias, prohibiciones; se encomendaba al Ministerio de Justicia el ejercicio del control sobre los integrantes del Ministerio Público o el Ministerio Fiscal como se le denominaba. El proceso penal fue dividido en dos etapas, a saber: instrucción y juzgamiento, la primera a cargo del juez instructor y la segunda a cargo del Tribunal Correccional por el Jurado (Sistema Mixto).

La instrucción podía iniciarse de oficio por parte del Juez Instructor, por denuncia del Ministerio Fiscal o del agraviado. Es decir, el Ministerio Fiscal no tenía el monopolio en el ejercicio de la acción penal, teniendo participación en el desarrollo del procedimiento como parte y después dictaminando en el juicio oral y acusando. La Constitución de 1933 reguló en el sentido de que debería haber Fiscales a nivel de Corte Suprema, de Cortes Superiores y Juzgados

En 1936, durante la gestión del Presidente Óscar R. Benavides, se organizaron los Procuradores Generales de la República para la defensa de los intereses del Estado, por lo que esta función fue separada del Ministerio Público. Ello se formalizó con la Ley N° 17537 del 25 de marzo de 1969. En ese contexto jurídico y político, en 1940 entró en vigencia el Código de Procedimientos Penales, vigente a la fecha en varios distritos judiciales del país. Se establecieron como etapas del proceso penal: la instrucción y el juzgamiento.



Los Fiscales en todos sus niveles formaban parte del Poder Judicial. En las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, de 1912 y 1963, el Ministerio Público fue regulado como institución autónoma, pero formando parte del Poder Judicial, con el nombre de Ministerio Público o Ministerio Fiscal. El 28 de julio de 1979 terminó una larga etapa del desarrollo del Ministerio Público, ligada al Poder Judicial.

Al arribar a la mitad del año de 1979, la historia del Ministerio Público cambió radicalmente. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le da una regulación en la Ley Suprema, atribuyéndole personería propia, con independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones. Así lo prescribía los artículos 250º y 251º del Capítulo XI de la Carta Magna.

Después la institución fue desarrollada en su Ley Orgánica, mediante el Decreto Legislativo 052 del 19 de marzo de 1981, vigente, funcionando conforme a ella hasta la fecha, con las modificaciones propias de la Constitución Política de 1993 y suspensiones por las disposiciones legales que dispusieron su reorganización, desde el 18 de junio de 1996 hasta el 6 de noviembre del 2000, día en que se promulgó la Ley Nro. 27367, que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.

La Constitución Política del Estado, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, regula al Ministerio Público en sus artículos 158º, 159º y 160º; como el titular en el ejercicio público de la acción penal,



habiéndose derogado los artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales de 1940.

2.5. EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

es.wikipedia.org/wiki/Ministerio. El Código de Procedimientos Penales de 1940, en su Artículo 2º, señala: "que la acción penal es pública o privada, que la acción pública se ejercita por el Ministerio Público de oficio o a instancia de parte agraviada o por acción popular; y que la acción privada se ejercita directamente por el ofendido, conforme el procedimiento especial y por querella".

Sobre el particular podemos resumir que el Código de Procedimientos Penales, aludido, se limita a señalar las formas de su ejercicio, además se aprecia una forma de coincidencia de los autores en definir a la acción penal, como una facultad de obrar y de promover la actividad jurisdiccional del Juez, en virtud de ello, tanto el agraviado, el Ministerio Público, el propio Juez, como la sociedad, tienen la facultad de recurrir al Estado representado por el órgano jurisdiccional, para que dé inicio al proceso penal con la finalidad de tutelar la agraviado, por tanto la acción penal, se constituye en una facultad de acceder al órgano jurisdiccional, con la finalidad de incitar al inicio del respectivo proceso penal, ante la comisión de un hecho delictivo.



La Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto Legislativo Nro 052, en su artículo 11°, establece que: "El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente".

Como podemos apreciar de ambos articulados que la comisión de un hecho punible de carácter público, siempre debe pasar por el Ministerio Público, no pueden dirigirse directamente al Juez penal, lo que significa, que el fiscal tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, del que se exceptúa determinados delitos.

El Código Procesal Penal de 1991, en su artículo 1° prescribe que: "la acción penal es la de naturaleza pública. Su ejercicio corresponde al Ministerio Público, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley" y, en su Artículo 3° dispone que: "El ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público comprende: el inicio y dirección de la investigación, la acusación y su participación en el juicio oral".

Ahora bien, el nuevo Código Procesal Penal 2004 dedica un artículo y cuatro incisos específicos a la acción penal.

Artículo 1.- La acción penal

La acción penal es pública:



- 1) Su ejercicio en los delitos de persecución pública, comprende al Ministerio Público. La ejercerá de oficio a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona natural o jurídica mediante acción popular.
- 2) En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito, ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella.
- 3) En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente.
- 4) Cuando corresponde la previa autorización del Congreso de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento previsto por la ley para dejar expedita la promoción de la acción penal.

De donde podemos señalar que el sujeto pasivo de la acción penal es siempre el Estado. Por ello, es que no puede calificarse la acción, a las denuncias formuladas ante la Fiscalía poniendo conocimiento la comisión de un delito público, siempre exigen un pronunciamiento motivado del Fiscal.

2.5.1. LA ACCIÓN PENAL EN LA DOCTRINA Y EL DERECHO PENAL

Noguera (2000). Según la doctrina en forma unánime se considera penal es el impulso que pone en marcha a los órganos jurisdiccionales con el propósito de que el Derecho sustantivo, sea aplicada mediante una sentencia sancionadora al infractor con una pena principal y otra accesoria, lo que significa que toda persona tiene el derecho de recurrir a la protección o tutela jurídica que brinda el Estado. En ese sentido, la acción penal es un derecho que nace de la violación de otro derecho que es violado, o sea, que si no hubiese derecho violado no habría acción hasta identificar ésta con el Derecho.

Noguera (2000) Inicialmente se sostuvo que la acción era diferente del derecho vulnerado, porque era autónomo, puesto que vive y actúa prescindiendo del derecho sustantivo y por lo tanto una acción ineficaz o temeraria de todos modos existía hasta la resolución final. En ese sentido, se le reconoce como el poder jurídico de exigir al órgano jurisdiccional para que se pronuncie sobre la realización de la pretensión punitiva del Estado derivada de la comisión de un hecho que la ley considera como un delito. Cubas (2003) Hoy se habla del carácter público de la acción penal, ello porque está dirigido al Estado porque es su atribución restablecer la paz social perturbada por la comisión de un delito; sin embargo esto constituye un elemento de la acción pública referida al poder punitivo del estado.



Carnelutti (1969) La acción penal es un derecho público y abstracto que tiene por objeto una prestación. Es un derecho autónomo, en cuanto que el interés que el mismo protege no es el interés sustancial deducido en la litis, si el interés tutelado con la acción es un interés esencialmente público, la acción debe concebirse como un ejercicio privado de una función pública. Goldschmidt (1959), reconoce un paralelismo entre el derecho punitivo y el derecho de acción penal, por una parte y, la pretensión de derecho civil y la acción civil por otra, admitiendo, asimismo un derecho de acción abstracto y otro concreto.

Leone (1963) La Acción Penal es la actividad procesal del Ministerio Público dirigida a obtener del Juez una decisión en mérito a la pretensión positiva del estado, proveniente de un delito". Según Noguera (2000) la acción y la jurisdicción son dos conceptos que se interrelacionan de tal modo que no es posible concebir el uno sin el otro, ambos forman parte de la función de administrar justicia que tiene el Estado. Operando la primera como presupuesto necesario de la segunda. Por tanto junto con la jurisdicción la acción es toda una institución procesal, de modo que actúa como una disciplina jurídica autónoma, dentro de las ramas del Derecho público, además constituye en todo caso una pieza fundamental que sustenta al derecho procesal penal.

En ese orden de ideas la Constitución Política del Perú en su Artículo 139º inciso 3), establece lo siguiente: Que son principios

y derechos de la función jurisdiccional, "la Tutela Jurisdiccional", del mismo modo el numeral 159º, en sus incisos 1) y 5) de la Ley Fundamental acotada, faculta al Ministerio Público la acción de la judicial y ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte en defensa de la legalidad, lo que quiere decir que si alguien considera lesionada la legalidad o los intereses públicos tutelados jurídicamente, puede recurrir al Ministerio Público para que inicie las acciones correspondientes.

Asimismo, ésta puede ser ejercitada de oficio, es decir por sí mismo, esto quiere decir que la denuncia por los delitos sólo la puede hacer el Ministerio Público, luego de determinar si es procedente o no iniciar tal juicio, en cambio ejercita la acción de parte, significa que los agraviados tienen que dirigirse al Fiscal para que éste pida a su vez al juez que inicie el proceso. (Se exceptúan esta regla en algunos procesos penales como los que corresponden a los delitos contra el honor, en los que sólo la denuncia del agraviado puede dar inicio al proceso, sin embargo, son la minoría de los casos).

Por lo expuesto, en nuestra Carta Magna, la acción penal es categóricamente público, ya que el derecho de sancionar proviene del Estado y sólo el Estado tiene esa atribución o potestad de imponer una pena. En ese estado de cosas, el Estado ha encargado al Ministerio Público, la función de interponer denuncia por ante el órgano jurisdiccional, ya sea de oficio o a

instancia de parte. San Martín (1999) En el orden jurisdiccional penal nacional, donde el Ministerio Público tiene reservado el monopolio del ejercicio de la acción penal en los delitos públicos, no es posible calificar de derecho la acción penal ejercitada por el fiscal, quién la promueve en cumplimiento de un deber y en el ejercicio de su función.

La promoción de la acción penal, en puridad, es una función constitucionalmente encomendada al Ministerio Público. En consecuencia, la acción penal consiste, en paridad, en un Poder – Deber de activar la jurisdicción penal, o sea de pedir al órgano jurisdiccional un pronunciamiento concreto sobre una noticia criminal específica, y que además, se trata de una iniciativa típicamente procesal dirigida a la activación de la función jurisdiccional para la actuación del derecho penal sustantivo.

Ante la comisión de un hecho que la ley penal califica de delito, el perjudicado se presenta a la autoridad denunciándolo y pidiendo sanción para el culpable, así como resarcimiento de los daños que ha sufrido con su comisión. García (1975) El ejercicio de la acción, por el Ministerio Público, obliga al juez a pronunciarse sobre la denuncia, pero no queda vinculado a la calificación que sobre el hecho haga el denunciante.

Si abre instrucción, el juez deberá tipificar el delito denunciado, calificación que puede o no coincidir con la contenida

en la denuncia. Entonces asumimos que la acción penal, es el derecho del justiciable para promover el ejercicio de la jurisdicción para el desarrollo del proceso.

Noguera (2000) La acción penal es la facultad de acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de propiciar el inicio del respectivo proceso ante la comisión de algún hecho ilícito, es decir que la acción penal es el ejercicio de la pretensión punitiva del estado, objetivada en el plano material con la realización del proceso penal.

Entonces podemos ensayar que la acción penal, es el poder – deber jurídico, encargado de promover la tutela y decisión del órgano jurisdiccional, sobre una determinada infracción penal.

2.6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN PENAL

Entre los elementos constitutivos y características esenciales de la acción penal tenemos:

- **ES PÚBLICA**

García (1975) Es pública porque va dirigida contra el Estado para hacer valer un derecho como es la aplicación de la ley penal. Noguera (2000) La acción penal es pública porque va dirigida a hacer valer un derecho público del Estado (la aplicación de la ley penal



frente a aquel que ha cometido un delito) y a hacer efectivo en el caso concreto el derecho penal objetivo que es eminentemente público.

- **ES INDIVISIBLE**

Alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito. No puede denunciar a unos y dejar libres de imputación a otros, igualmente responsables. Noguera (2000) El ejercicio de la acción penal debe comprender a todos los que han participado en la comisión de un hecho delictivo. No sería adecuado tener que ejercer la acción penal en forma individual a cada uno de los copartícipes en la comisión u omisión delictiva.

- **IRREVOCABLE**

Una vez iniciado un proceso penal, sólo puede concluir con sentencia condenatoria o absolutoria o auto del Tribunal que declare la improcedencia de la acción. Fundada la excepción o cuestión planteada. En estas denuncias no procede, como regla general, el desistimiento ni la transacción.

También es conocido con los nombres de irrenunciabilidad e indisponibilidad. Esto es, resulta inadmisibles pretender dejar sin efecto, frustrar o truncar el desarrollo del procedimiento por desistimiento, ésta es la regla general, pero excepcionalmente y en los casos taxativamente previstos por la ley puede ser viable el desistimiento de la acción penal.

- **ES DE OFICIO**

Oré (2004) El Ministerio Público se constituye en el titular del ejercicio de la acción penal y como tal actúa de oficio, a instancia del interesado, por acción popular o por noticia policial. Se entiende, entonces, por este principio que la persecución penal es promovida por los órganos del Estado.

- **ES OBLIGATORIO**

Noguera (2000) El Estado tiene el deber mediante sus organismos oficiales, no solamente de perseguir a los presuntos autores y cómplices, sino sancionar de oficio, en los delitos de ejercicio público. Porque en los delitos de ejercicio privado se requiere una denuncia previa de la parte agraviada. Esta obligatoriedad de la acción penal es conocida también en la doctrina con el nombre de Principio de Legalidad procesal.

García (1975). La obligatoriedad significa que, conocido el delito, el Ministerio Público no sólo está obligado a denunciarlo, sino una vez instaurada la instrucción, debe cumplir con los actos procesales destinados a la promoción de la acción penal, es decir, que su obligación no concluye con la denuncia, no es mero denunciante, sino que debe continuar hasta que, alcanzado su finalidad, de término al proceso.

- **ES INDELEGABLE**

Cubas (2003) Significa que, la ley sólo autoriza a la que tiene derecho de ejercer la acción penal, por tanto es un derecho indelegable, intransferible, en el caso de la acción penal pública esta facultad está en manos del Ministerio Público y en el caso de la acción penal privada, corresponde al agraviado o a su sustituto legal. Lo que significa que la acción penal sea pública o pública y su ejercicio pueda ser público o privado, sólo puede ejercerla la persona a quién la ley le otorga esa facultad.

La finalidad ulterior del ejercicio de la acción penal es la materialización de la represión jurídico-penal contra el imputado, siempre que la verdad concreta lograda en el proceso conduzca a ella. La materialización de la represión jurídico-penal consiste en la imposición de la pena prevista expresamente en la ley penal; pero a veces no es posible concretar la imposición de la pena sino optar por otra solución legal como es la imposición de una medida de seguridad en sustitución de la pena.

2.7. MEDIOS DE DEFENSA Y LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

Burgos (2002). Los medios de defensa, en sentido general, deben ser entendidos, como toda actividad destinada a salvaguardar los derechos del imputado o de la parte civil o del tercero civil responsable.



En sentido restringido, es la defensa dirigida a paralizar el ejercicio de la acción o a destruir su eficacia jurídica, fundada en una omisión procesal o en una ley procesal.

En el Derecho procesal penal, los medios técnicos de defensa, engloban a todos aquellos obstáculos, legales que concede la ley, para defenderse de una imputación, estos son las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y las excepciones. Es el Abogado defensor quien propone el medio de defensa pertinente, en la oportunidad que la ley procesal concede, a fin de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia que atenué su responsabilidad.

En ese sentido la defensa del imputado es una actividad esencial del proceso porque tutela la libertad y los derechos individuales y que su necesidad se refiere tanto a la defensa material, que pueda hacer el propio imputado, como a la defensa formal o técnica, a cargo de los letrados. Aún queda discutible, que si el imputado debe ser asistido siempre por un defensor o si puede también defenderse personalmente. En la defensa el denunciado rechaza la acción penal, niega los hechos denunciados, esto es, toma el poder jurídico, que tiene el denunciado para extinguir la acción o el derecho de denunciante.

Noguera (2000) Las defensas trasuntan una mera oposición o negativa al fundamento de la acción penal, Se dan cuando el imputado de delito o su defensor, desconoce la perpetración o realidad del hecho que se le atribuye o bien niega haber intervenido en la comisión o bien aún



admitiendo la existencia del hecho, estima que no es constitutivo de delito conforme a la ley penal o mediante causales de inculpabilidad o justificación o cualquier otra que lo exima de pena o posibilite su atenuación o aun reconociendo su participación delictual propugna una pena más atenuada.

2.8. FORMAS DE CONOCIMIENTO DE LA NOTICIA CRIMINAL

Doctrina jurisprudencial (2010). El Fiscal Provincial puede tomar conocimiento de la comisión de un delito por intermedio del agraviado, por acción popular y, en forma directa, por los medios de comunicación existentes o por la intervención de la autoridad policial. De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal el Ministerio Público tomará conocimiento del delito por denuncia de parte, acción popular, noticia policial y en forma directa. Se separa al Fiscal de la Policía y se establece claramente que a quien tiene que llegar la noticia criminal es le Ministerio Público. Por ello, si se entera la policía de los hechos, debe ponerlos en conocimiento del titular de la acción penal.

No existe ninguna formalidad o requisito de admisibilidad para la denuncia, pues puede ser verbal o escrita. La primera se utiliza especialmente en los casos de acción popular y debe, necesariamente, levantarse un acta de dicha denuncia haciendo constar los detalles y circunstancias de la comisión del delito; además, debe ser suscrita por el denunciante y la autoridad que la recibe. El artículo 328º del Nuevo Código Procesal Penal reitera la posibilidad de que pueda plantearse por

escrito o verbalmente, quién, además, debe colocar su impresión digital; si no puede firmar, basta la impresión digital; pero deberá dejarse constancia del impedimento. Si es verbal, deberá consignarse en un acta.

La denuncia debe contener, además, una serie de elementos que son indispensables para que sea considerada como tal:

- La relación de las circunstancias del hecho delictivo, con expresión de lugar, tiempo, modo e instrumento utilizados.
- El nombre o nombres de los autores, cómplices y de las personas que presenciaron los hechos.

Se debe añadir a estas exigencias la prevista en el párrafo a) del artículo 328º del Nuevo Código referida a la identificación del denunciante.

En el Nuevo Código Procesal Penal se establece que el Fiscal puede requerir la intervención de la policía para efectuar las diligencias o inaplazables destinadas a determinar el lugar de los hechos y el objeto de conocimiento, individualizar a los implicados y asegurar los medios de prueba. Consideramos que esta sub etapa tiene un objeto distinto a la de investigación propiamente dicha, siendo su propósito el reunir la evidencia indispensable para formalizar la investigación pero, esencialmente evitar que ésta se pierda. Por ello concordamos evitar que ésta se pierda. Por ello concordamos con los señalados por Duce y Riego, quienes señalan que: "Esta constituye una primera subetapa de la investigación.

Su principal ventaja, como señalamos, consiste en la mayor flexibilidad que disponen los órganos de persecución penal para llevar adelante la investigación de los delitos". Estas diligencias preliminares se deben efectuar en un plazo de 20 días, salvo supuestos de detención o casos más complejos, en los cuales la norma procesal deja a criterio del Fiscal disponer un tiempo mayor.

El Fiscal debe realizar la ampliación por un tiempo razonable, para lo cual debe considerar dos tipos de criterios:

- a) Subjetivos, referidos a la actuación del investigado y del fiscal (inconcurrencia injustificada a las citaciones, ocultamiento o negativa de entregar información o el que se hayan realizado las diligencias idóneas o necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
- b) Objetivo, referidos a la naturaleza de los hechos investigados (si se trata de una organización criminal, el grado de colaboración de las entidades involucradas con el Fiscal, la realización de exámenes o estudios especializados).

Aranguren (s.f.). Consideramos que no sería razonable que la ampliación dispuesta por el Fiscal tenga como límite máximo el plazo previsto para toda la investigación preparatoria, esto es, ciento veinte días u ocho meses, en todo caso, el límite máximo debe ser sesenta días. Concluidas las diligencias preliminares, la policía debe emitir el informe policial, que se distingue del atestado, puesto que sólo contiene los antecedentes que motivaron su intervención, la relación de las diligencias

efectuadas y en análisis de los hechos, sin efectuar ninguna calificación de los hechos ni atribuir responsabilidades.

Bajo los alcances del sistema anterior, las diligencias preliminares realizadas con la presencia del fiscal tenían valor probatorio. En el nuevo sistema procesal sólo tiene valor de prueba las actuaciones sometidas al juzgamiento, salvo la prueba anticipada.

2.9. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y ACUSACIÓN DIRECTA

Calderón (s.f.). En el modelo anterior se dejaba a criterio del Juez Penal decidir en qué momento estaba terminada la instrucción, siempre y cuando se tuvieran elementos suficientes que acreditarán la comisión del delito y la responsabilidad de los autores. En el nuevo sistema procesal, la investigación es dirigida por el Fiscal, por ello, a él le corresponde darla por concluida cuando alcance sus objetivos.

Sin embargo, si vencidos los plazos el Fiscal no da por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la conclusión. Para tal fin, se efectuará una Audiencia de control de Plazos, en la cual se revisará los actuados y se escuchará a las partes, para luego decidir si se da por concluida o no esta etapa.

A través de este mecanismo se pretende lograr que no se prolongue excesivamente la investigación en detrimento del imputado



respecto a su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a la transformación de las medidas de cautela en anticipos de condena, así como el que el sistema de justicia penal se deslegitime ante la opinión pública. Sin embargo, se advierte en la realidad que el cumplimiento de los plazos depende también en gran parte de un sistema adecuado de gestión que agilice ciertos trámites con el auxilio de la tecnología.

En el desarrollo de esta Audiencia se advierte diversos problemas, entre ellos, si los plazos deben ser observados con rigidez. La Sala Penal Suprema en la Casación N° 02-2008, La Libertad, indicó que se trata de un plazo legal (no sujeto a discrecionalidad), previsto tanto para las diligencias preliminares como para la investigación preparatoria (en forma independiente). El plazo previsto para ésta última se computa desde la comunicación que se realiza de la formalización de la investigación al Juez de la Investigación Preparatoria, conforme lo prescribe el inciso 2° del artículo 143°.

La acusación directa es un mecanismo de aceleración del proceso que permite llevar adelante un proceso común sin tener que realizar una etapa de investigación preparatoria. A través de este mecanismo el Fiscal puede formular acusación en base a lo actuado en las diligencias preliminares, es decir, con el informe policial, puesto que, cuenta con elementos suficientes de convicción, además de observar las condiciones de perseguibilidad y punibilidad. Dichos elementos son:

- a) El requerimiento acusatorio cumple las funciones de la disposición de formalización de la investigación, es decir, individualiza al imputado y satisface la imputación clara y precisa de un delito; además, establece la suficiencia probatoria, determina la cuantía de la pena y la reparación civil, y ofrece los medios de prueba.
- b) El derecho de defensa es salvaguardado por el hecho que la acusación debe ser notificada a efectos del control formal y material que puedan realizar las partes.
- c) Si la víctima desea constituirse en actor civil podrá hacerlo antes de que concluyan los diez días de plazo otorgados por la ley procesal para que se realicen las observaciones necesarias a la acusación.
- d) Las medidas de coerción pueden ser requeridas para ser discutidas en la audiencia de control de acusación. Sin embargo, cuando existan razones de urgencia, el Fiscal puede pretender que se discutan en una audiencia autónoma.

2.10. EL ARCHIVAMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Chávez (s.f.). La Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto Legislativo No 052 coherente con el texto constitucional, en el artículo 94º ordinal segundo sostiene que: "Denunciado un hecho que se considere delictuoso por el agraviado o cualquiera del pueblo...Si el Fiscal estima procedente la denuncia, puede alternatively, abrir



investigación policial para reunir la prueba indispensable o formalizarla ante el Juez Instructor...Al finalizar el atestado policial sin prueba suficiente para denunciar, el Fiscal lo declarará así;....", éstos son los antecedentes legislativos más importantes que tenemos para apreciar cómo ha ido evolucionando las facultades del Fiscal a propósito de sus facultades "Requirientes de Justicia" cuando formaliza investigación preparatoria o acusa (función positiva) o cómo ha evolucionado su facultad de "Órgano Defensor de la Legalidad" cuando archiva las denuncias (función negativa).

Actualmente con la vigencia del NCPP el Fiscal archiva la gran mayoría de denuncias no realizando en algunos casos ninguna investigación objetiva y relevante para llegar al Archivo de la Investigación, no cumpliendo su función de verdadero Defensor de la Legalidad, porque en verdad el legislador dejaba un margen de discrecionalidad muy grande al Fiscal, cosa muy diferente con lo que ocurre en los lugares donde se aplica el Código de Procedimientos penales donde la Fiscalía recibe las denuncias de la PNP o los particulares y más fácil es remitirlo al órgano jurisdiccional, para que ellos investiguen o archiven.

Con los antecedentes legislativos que hemos hecho referencia se dejó un margen de discrecionalidad al Fiscal regulado en el nuevo sistema penal. En efecto el ordinal 1ro del artículo 334º del NCPP, señala puntualmente que "Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado diligencias preliminares, considera que..."; conforme

se puede apreciar el proceso penal se inicia con la "notitia criminal" y ésta llega a conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso el Fiscal tiene tres opciones:

- a) Califica la denuncia y puede considerar que la denuncia no tiene contenido penal, que la denuncia no reviste los caracteres de delito; por lo que puede archivar de plano, ésta es la primera oportunidad de archivo que le concede el legislador en el NCPP. Si bien es cierto, cuando el Fiscal recibe una denuncia no está en su posibilidad declarar inadmisibile, por ejemplo, por faltar un requisito de procedibilidad o de procesabilidad a la denuncia, lo que tiene que hacer es disponer la reserva provisional de la investigación, notificando al denunciante, para que subsane la omisión, conforme lo permite el ordinal 4º del artículo 334º del NCPP; y
- b) Si considera que el hecho punible que se le puso en conocimiento tienen contenido penal, es decir, reviste los caracteres de delito, inicia los actos de investigación. Esta investigación tiene una duración de sesenta días naturales que es el plazo legal, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo fiscal distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Al culminar éste plazo legal o el fijado por el Fiscal, debe decidir si formaliza y continúa con la siguiente etapa, es decir, con la investigación preparatoria; o si archiva.



En conclusión, hay solo dos momentos en el proceso penal, por el cual el Fiscal tiene la oportunidad de archivar una denuncia, al calificar la denuncia o a la culminación del plazo de investigación preliminar, y en ambos no existe un control jurisdiccional, pero sí está sujeto a un control de plazos o tutela de derechos.

- c) Que, el hecho denunciado ha incurrido en causa de extinción de la acción penal; ellas se encuentran regulados en el artículo 78º del Código Penal que precisa que la acción se extingue: 1) Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia; 2) Por autoridad de cosa juzgada; y 3) En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue además de las establecidas en el numeral 1) del presente, por desistimiento o transacción. Finalmente se extingue la acción penal por sentencia civil si la sentencia ejecutoriada en la jurisdicción civil, resulta que el hecho imputado como delito es lícito; y
- d) Que, el hecho denunciado carezca de indicios reveladores de la existencia de un delito; si damos una lectura restrictiva del artículo 334º del NCPP, el Fiscal luego de haber calificado la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, solo podría archivar el caso por los tres supuestos antes enumerados, pues no hay norma expresa que le faculte archivar el caso por ausencia de elementos de convicción, en todo caso lo que tendría que hacer es abrir investigación preparatoria, y si al final no;

pero ello no es así si apreciamos con detenimiento las normas contenidas en los artículos 334º numeral 1., 336º numeral 1.

2.11. IMPUGNACIÓN DEL ARCHIVO FISCAL Y EL RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS

Peña (2007). El Archivo Fiscal ocurrido en etapa de la investigación preliminar, es sin control judicial, es decir, el órgano jurisdiccional no controla los actos del Fiscal que determinan el Archivo de la investigación; sin embargo, considero que el Archivo Fiscal y los Actos de investigación preliminar en algunos casos pueden estar sujetos a control jurisdiccional mediante *de mecanismos procesales como*, tutela de derechos, control de plazos y *acciones* de garantía constitucional. Muy aparte a lo establecido para impugnar el Archivo Fiscal en sede pre-jurisdiccional, que es a través del recurso de Elevación de Actuados que se dirige contra la disposición que determina el archivo, para cuyo caso el requerimiento debe formularse en el plazo de cinco días, conforme lo precisa el numeral 5 del artículo 335º del NCPP.

Elevado el expediente al Fiscal Superior se pronunciará también dentro del quinto día, el Fiscal Superior tiene tres opciones:

- 1) Puede declarar fundado el recurso de queja y ordenar que se amplíen los actos de investigación, con el mismo Fiscal o puede cambiarlo por otro Fiscal Provincial si se demuestra que la denuncia anterior no fue debidamente investigada;



- 2) La otra posibilidad es, se formalice y se continúe con la investigación preparatoria; y finalmente;
- 3) El Fiscal Superior puede confirmar el archivo de las actuaciones, con el cual la Disposición del Archivo Fiscal queda firme.

Si la Disposición de Archivo del Fiscal queda firme queda por preguntarse si la Disposición del Fiscal Superior que archivó definitivamente el caso puede ser impugnado. En principio el Nuevo Código Procesal Penal no da ningún tipo de norma adjetiva que permita la impugnación de una Disposición de Archivo que haya emitido el Fiscal Superior; el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sosteniendo: En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados, estaremos, sin lugar a dudas, ante la circunstancia de un proceder inconstitucional, y ante un contexto donde, al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de exclusividad que se le reconoce, resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la Constitución.

Puntualizado queda, en todo caso, que solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, violación del contenido no esencial o adicional que no son,



por sí mismas, contrarias a la Constitución sino al orden legal. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso.

Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo reclamo que se le hacen por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional", de esto podemos argumentar que las decisiones inconstitucionales de todo organismo Constitucional, incluido el Ministerio Público, siempre deben estar bajo el control que ejerce el Tribunal Constitucional; si bien la Sentencia del Tribunal, antes citada, se refiere al control de una resolución judicial, esa sentencia es coherente con lo previsto por el artículo 4º del Código Procesal Constitucional que admite el amparo y el habeas corpus respecto de resoluciones judiciales firmes que vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso.

Si seguimos la doctrina del Tribunal Constitucional antes mencionada, las Disposiciones de Archivo pueden ser impugnado en un proceso constitucional, pero, solo en el caso de producirse una manifiesta y evidente violación de normas que consagran garantías o derechos fundamentales, caso contrario un archivo fiscal sería incontrolable, lo que precisamente no es lo que se aspira dentro de la lógica asumida por el Tribunal Constitucional.



El numeral 1 del artículo 335° del NCPP, precisa que la Disposición de Archivo Fiscal impide que otro Fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación Preparatoria por los mismos hechos. Es decir, un archivo que quedó firme o un archivo que fue confirmado ya resulta inimpugnable en sede ordinaria. Un archivo en esas condiciones ya está surtiendo efectos de que una persona no pueda ser perseguido por segunda vez - por el mismo órgano del Ministerio Público o por un tercero incluido el Poder Judicial - cuando se trata de las mismas personas, por los mismos hechos y por el mismo fundamento; sin embargo, el legislador ha consignado en el numeral 2 de la norma en comento, que por excepción y si se aportan nuevos elementos de convicción, el archivo Fiscal se reapertura; por consiguiente el archivo está sometido a una condición resolutoria, pues estando surtiendo efectos de no persecutoriedad, se archiva y el ciudadano vuelve a ser perseguido por una segunda vez.

Con estos nuevos elementos de convicción, son el único elemento que le hace perder estabilidad al Archivo Fiscal, por consiguiente no basta que sean nuevos, es preciso que sean evidentes y suficientes como para quebrar al archivo, pues si no tienen esas exigencias el archivo se mantendrá sólido.

El numeral 2, del artículo 335° del NCPP, no debe hacer pensar que el Archivo también puede ser reabierto cuando se demuestra que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, este supuesto se refiere a que en principio deben existir nuevos elementos de convicción y



si de ellos se evidencia que el Fiscal del caso no investigó debidamente, recién el indiciado puede recurrir al Fiscal Superior que también previno; es decir, no se puede recurrir a cualquier otro Fiscal Superior – solicitando se designe a otro Fiscal Provincial, obviamente el reemplazo exige el descargo del Fiscal quejado.



CAPITULO III

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE 1993

3.1. EL MINISTERIO PUBLICO COMO ORGANISMO AUTÓNOMO

Ministerio Público, Fiscalía de la Nación (s.f). De conformidad al Artículo 158 de la Constitución Política de 1993, el Ministerio Público es autónomo.

Al respecto debe tenerse en cuenta que, con la Constitución Política de 1979, se confirió facultades de investigación al Ministerio Público, reconociéndose en sus propios preceptos su institucionalidad autónoma, como órgano requirente de la acción penal ajeno al poder jurisdiccional. Concretamente el inciso 5), del artículo 250º establecía que el Ministerio Público “vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial”. Luego, con la dación del Decreto Legislativo N° 052 de 1981 –Ley Orgánica del Ministerio Público-, se trasladó legislativamente dicha función investigadora en su estructura organizacional, estableciéndose que el Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial.

Con ese objeto las fuerzas policiales realizan la investigación, empero, fue la Ley Fundamental de 1993 que recogió la función del Fiscal desde una técnica legislativa más depurada y a partir de una terminología más adecuada, señalando que corresponde al Ministerio Público conducir desde sus inicios la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

3.2. EL MINISTERIO PUBLICO COMO TITULAR DEL EJERCICIO PUBLICO DE LA ACCIÓN PENAL

Salas (2004). De conformidad al Artículo 159 inciso 4 y 5 de la Constitución Política de 1993 establece como algunas de sus atribuciones del Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito y con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; y, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

3.3. EL MINISTERIO PUBLICO Y LA CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

De lo establecido en el artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993 se colige lo siguiente:

1. Es el Ministerio Público, como titular de la acción penal, quien asume la conducción directriz de la investigación criminal desde sus inicios,



consagrándose de esta manera el principio acusatorio en el sistema procesal penal.

2. El Ministerio Público, como director de la investigación criminal, es la institución encargada de programar y de delinear la estrategia de investigación, y para tal fin se sirve de los órganos especializados en criminalística de la Policía Nacional: por consiguiente, el órgano policial se somete a los mandatos del Fiscal en este ámbito.
3. El Fiscal no solo es el funcionario público encargado de pronunciar la persecución penal, sino también de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, controlando y vigilando la actuación policial.

Carbonelli (1999) De todos modos, la Constitución Política del Estado solo configura los principios sobre los cuales debe desarrollarse la política criminal en el ámbito de la persecución penal. La Constitución no contiene en su seno una política criminal concreta ni, por tanto, establece unos criterios fijos; si así lo hiciera dejaría de ser el instrumento básico regulador de la convivencia democrática y pluralista para convertirse en un programa político partidista; pero sí marca unas líneas programáticas generales y contiene un sistema de valores que no puede ser contradicho.

En efecto, el legislador se quedó en medio camino, pues, no adecuó normativamente el Código de Procedimientos Penales de 1940 a la nueva configuración de la persecución penal que revelaba la Ley Fundamental. No olvidemos que el cuerpo adjetivo en la fase de



instrucción (investigación). Dicho en otras palabras: si bien el marco jurídico – constitucional le había conferido al Ministerio Público la dirección de la investigación criminal existía un vacío legal en cuanto a los instrumentos y elementos que debía contar esta institución para poder desarrollar de forma cabal este rol fundamental. Por consiguiente, si bien la Carta Política consagrada el principio acusatorio en toda su dimensión formal, la normatividad específica no recogía el mandato constitucional en toda su amplitud.

Con todo, el marco político criminal esbozado significó un paso fundamental hacia la configuración de un marco legal sostenido fundamentalmente en el principio acusatorio. De esta forma se separa tajantemente las funciones de acusar e investigar aquellas estrictamente decisorias; las primeras atribuidas al órgano persecutor público y las segundas reconocidas exclusivamente en el juzgador.

El proceso penal podrá denominarse “democrático” cuando más nítidas y tajantes sean las separaciones entre las funciones del órgano requirente con las del órgano decisorio.

Sin embargo, esta separación no adquiere aún la amplitud de las facultades de investigación en monopolio del Ministerio Público. Pues, según las normas vigentes, el juez penal aún realiza función investigadora. Estado de cosas que es corregido por el CPP del 2004. Tal como se expuso en líneas precedentes.

3.4. FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

Al entrar en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal en la región de Puno el primero de octubre de 2009, resulta trascendental precisar las funciones que tienen los Fiscales en la investigación del delito, lo que implica entender el rol de conducir la investigación del delito, a cuyo efecto, de acuerdo al inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito.

Por tanto el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal pública y de la investigación del delito desde su inicio, de lo que dependerá que promueva la acción penal.

Este lineamiento se encuentra desarrollado en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y asume la investigación del delito desde su inicio, lo propio, en el inciso 2 del Artículo 60 del indicado Código, precisando que el Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito o finalidad los efectivos de la Policía Nacional están en la obligación de cumplir los mandatos de los Fiscales en el ámbito de la investigación del delito.



3.5. ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO A LA LUZ DE CONSTITUCIÓN Y EL NCPP

Castillo (2002). La titularidad de la acción penal, proviene del mandato constitucional en el artículo 159º, numerales 1) y 5) de la Carta Política, en los que se atribuye al Ministerio Público el monopolio del ejercicio de la acción penal en los delitos de persecución pública. Se establece que sólo el Ministerio Público puede promover la acción penal ante el órgano jurisdiccional, en tanto que la víctima, los ciudadanos a través de la acción popular o la autoridad policial cuando corresponda, sólo están facultados para poner en conocimiento del Fiscal la comisión de un hecho delictivo.

En este inciso se establece claramente la facultad de dirección que el Ministerio Público ejerce respecto de la investigación del delito, desde su inicio. A renglón seguido, se complementa la disposición estipulándose la obligación de la Policía de cumplir las disposiciones del Fiscal en el «ámbito de su función», esto es, en el marco de la conducción de la investigación del delito. Naturalmente, esta disposición tiene base constitucional en tanto el artículo 159º inciso 4) de la Carta Magna de 1993 otorga expresamente al Ministerio Público de dicha facultad que, no se limita a una labor de coordinación y vigilancia, como algunos sectores pretenden, sino que se materializa en una efectiva dirección o conducción de la investigación.



En la atribución al Ministerio Público de la conducción de la investigación del delito encontramos forma clara la idea del proceso penal acusatorio. En efecto, el modelo introducido por el nuevo Código reserva al Fiscal dicha función en tanto y en cuanto las atribuciones de investigación y juzgamiento se encuentran perfectamente delimitadas, correspondiendo en exclusiva las primeras al Ministerio Público y las segundas al Órgano Jurisdiccional, con lo que se descarta definitivamente la figura del Juez Investigador o Instructor que, en la sistemática del Código de Procedimientos Penales de 1940, pervivió hasta antes de la entrada en vigor del novísimo Código Procesal Penal.

Actualmente, conforme lo prescribe la Constitución de 1993, el Ministerio Público es un organismo autónomo y jerárquico público de la acción así como la conducción de la investigación del delito. Ante la asunción de un nuevo modelo procesal, plasmado en el Código Procesal Penal de 2004, se esperó que el Ministerio Público se modernice, sea más fuerte, vigoroso y se halle a la altura de las circunstancias impuestas por el rol protagónico que le corresponde en el modelo acusatorio adversarial. Sin embargo, la realidad nos demuestra ésta sana intención de los legisladores, no es del todo cumplida, pues, existe de parte del Estado mucha incoherencia entre lo que señala la Constitución, el Decreto Legislativo 052 y la nueva norma procesal penal. En concreto no hay interés en fortalecer al Ministerio Público para que cumpla a satisfacción sus fines y objetivos.



De otro lado, es indudable que la implantación del nuevo modelo acusatorio exige una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público acorde con los cambios introducidos así como un nuevo modelo organizacional para encarar el reto que impone la puesta en vigencia del presente Código Procesal Penal, respecto de lo cual existe ya una respuesta plasmada en la Propuesta del Ministerio Público para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de abril del año 2005, elaborada por cuatro comisiones de trabajo, integradas por Fiscales de todas las instancias, con el apoyo de consultores internacionales de la organización IRIS CENTER PERÚ, que centraron su labor en cuatro temas específicos: Policía Institucional, Despacho y Gestión Fiscal, Normatividad y Reglamentos y Directivas.

De otro lado, existe claridad respecto a sus atribuciones:

1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación.
2. Conduce la investigación Preparatoria. Practicará u ordenará participar los actos de investigación que correspondan, indagando no sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo.

3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley establece.
4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el artículo 53º.

Respecto a su independencia, prevalece la actuación de los Fiscales en todas las instancias. En las funciones desarrolladas el Fiscal tiene como únicos límites la Constitución y la Leyes. Dentro de este marco actúa con independencia de criterio, lo cual implica que, en el ejercicio de sus funciones, no debe admitir interferencias de ninguna clase, provengan estas del interior de la institución o del propio poder político.

En el Perú los criterios precedentemente expuestos no son de recibo absoluto puesto que, si bien es cierto en nuestro sistema el Ministerio Público es un ente jerárquicamente organizado, no es menos cierto que las directivas o instrucciones que imparta la Fiscalía de la Nación sólo serán vinculantes en tanto estén referidas a cuestiones de orden general atinente al mejor desarrollo de la función fiscal y a la orientación técnico –jurídica de la labor desplegada en el conocimiento de las causas, siendo necesario precisar que, de ninguna manera, sería admisible que dichas instrucciones o directivas pretendan orientar el trabajo fiscal y las decisiones en casos concretos y específicos.



En este orden de ideas, la doctrina nacional es casi unánime en cuanto a considerar que, a diferencia de los sistemas alemán, español y francés, en nuestro país los Fiscales no actúan, *strictu sensu*, como meros representantes o delegados de la Fiscalía de la Nación o de los funcionarios fiscales superiores en el conocimiento de los casos asignados, sino que, en el ámbito de sus funciones, actúan con autonomía, independencia de criterio e imparcialidad o criterio objetivo.

La Investigación Preparatoria, regulada en el Código en la Sección I del Libro Tercero e integrada por el conjunto de actos investigativos desplegados por el propio Fiscal o, vía delegación, por la Policía, con el propósito de reunir los elementos de cargo o descargo que le permitirán formular o no acusación, es conducida o dirigida por el Ministerio Público. En tal sentido, la Policía actúa como un auxiliar importante en el logro de los objetivos de la investigación, por lo que debe quedar meridianamente claro que ella debe acatar las disposiciones dictadas por el Fiscal en el ejercicio de sus funciones. Existe un nivel de coordinación entre la Policía y el Ministerio Público en el desarrollo de la actividad investigativa, pero dicha coordinación estará presidida necesariamente por el poder de dirección que ejercerá la Fiscalía sobre la autoridad policial en el ámbito de sus funciones. Tal conducción quedará plasmada tanto en la realización de los actos de investigación propiamente dichos, como en la atribución de solicitar al Órgano Jurisdiccional las medidas que considere pertinentes, tales como la confirmatoria de incautación, el embargo, el desalojo preventivo, la prisión preventiva, la internación preventiva, etc.



En este inciso se establece la activa participación del Ministerio Público en el curso de todo el proceso penal, para lo cual podrá interponer (está legitimado) todos los recursos y medios impugnativos previstos en el mismo cuerpo normativo, tales como los recursos de reposición, apelación, casación, queja, la acción de revisión, las nulidades, etc. El Código utiliza la conjunción «y» para referirse a los medios y recursos de impugnación, estableciendo una separación que tendría como base la relación de género –especie existente entre ambos conceptos, de tal suerte que el medio sería el género y el recurso la especie. En efecto, además de los recursos de reposición, apelación, casación y queja, el Código regula en el Libro Cuarto, dedicado a la impugnación en general, la llamada acción de revisión que ha merecido una sección independiente a la de los recursos y que, de este modo, ha dejado de denominarse «recurso de revisión» como en el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940.

Castillo (2002). Se estipula el deber del Fiscal de inhibirse del conocimiento de una investigación o del proceso en los casos en que se encuentre dentro de los supuestos previstos para la inhibición del juez, esto es, si tuviere él o sus parientes (dentro de los grados establecidos en el artículo 53º) interés directo o indirecto en el proceso, amistad notoria o enemistad manifiesta o compadrazgo, acreencia o deuda con las partes, intervención anterior como Juez o Fiscal, perito, testigo o abogado de las partes, en el proceso y, en *numerus apertus*, ante la presencia de cualquier otro motivo grave que afecte su imparcialidad. La exigencia de

objetividad e imparcialidad en la actuación del Fiscal obliga a éste a apartarse del conocimiento de la investigación o proceso cuando esté incurso con situaciones que pongan en tela de juicio o afecten su recto sentido en el desarrollo de su labor.

Sin duda el aspecto más importante que le encomienda la Constitución al Ministerio Público, es lo referido a su papel de investigador de los delitos, para ello tendrá en cuenta:

1. El Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión.
2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará –si correspondiere –las primeras Diligencias Preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional.
3. Cuando el Fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal.
4. Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso. Programará y coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia



de la misma. Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes.

En primer lugar es necesario precisar que los actos de investigación realizados directamente por el Ministerio Público o, por delegación, por la Policía, de ningún modo deberán ser considerados como «pruebas» para fundar la decisión judicial, ya que lo actuado en el marco de la investigación tiene como objeto únicamente preparar el Juicio Oral, «proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y para la defensa». Como es sabido, las pruebas se actúan en la fase de juzgamiento, bajo los principios de inmediación y contradicción. De allí que el Código establezca que el Ministerio Público encaminará su actuación a la obtención de los «elementos de convicción» para la acreditación de los hechos y la identificación de los autores o partícipes del delito. Sin embargo, como ya lo hemos puntualizado en su lugar, también ha de buscar, si correspondiere, los elementos de descargo dada su posición especial en el proceso. En esta tarea, el Fiscal deberá actuar, como ya se ha señalado en líneas precedentes, con el auxilio de la autoridad policial, en funciones de Policía Judicial.

La disposición en comento establece que al recibir la *noticia criminal* el Fiscal tendrá dos alternativas: realizar por cuenta propia las primeras Diligencias Preliminares o delegar dicha función en la Policía. Nos deberíamos preguntar en qué casos el Fiscal asumirá la realización de tales diligencias y en qué otros le encomendará a la autoridad policial



dicha misión. La respuesta tiene que ver con las particularidades de la casuística sometida a la consideración del Fiscal, en cuya virtud éste deberá decidir considerando lo que resulte más apropiado para el éxito de la investigación.

Desde luego, la disposición no es una novedad en el proceso penal peruano puesto que ya la Ley Orgánica del Ministerio Público –Decreto Legislativo N° 052 –prescribió como la alternativa de abrir investigación policial en caso que considere procedente la denuncia. De igual forma el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940, también le atribuirá a la Policía Judicial la facultad de practicar diligencias por delegación del Ministerio Público (art. 64º). Sin embargo, una diferencia sustancial es que dicha investigación policial delegada servía para reunir la «prueba indispensable», mientras que los actos de investigación en el marco del nuevo modelo, como ya se ha señalado, tan solo servirán para preparar la acusación y el juicio.

Resulta claro que la finalidad de la disposición contenida en la norma es lograr en la investigación del delito un perfecto equilibrio entre eficacia y garantía. En efecto, si por un lado se establece que el Fiscal debe diseñar toda una estrategia para el éxito de la investigación, en la que, previa coordinación con expertos, empleará técnicas, pautas, etc. Por otro lado, se cuida el respeto escrupuloso al derecho de defensa y demás derechos fundamentales del imputado. Es más, diríamos que el Fiscal se convierte en el garante de la no vulneración de los derechos del imputado.



CAPITULO IV

EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL ROL DEL FISCAL EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

4.1. AUTONOMÍA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Ministerio Público, Fiscalía de la Nación (s.f.). Conforme al Artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Sobre el tema, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 16 y 18 de la sentencia recaída en el expediente 06204-2006-PHC/TC, Loreto, caso Chávez Sibina, de 09 de agosto de 2006, ha indicado que si bien es cierto se reconoce a los Fiscales el ejercicio independiente de sus funciones de acuerdo con sus propios criterios y en la forma que consideren más ajustada a los fines constitucionales y legales que persigue el Ministerio Público, también lo es que el específico mandato del artículo 159° de la Constitución debe ser

realizado de conformidad con criterios objetivos y razonables, y por tanto, exentos de un ejercicio funcional arbitrario; además precisa que, el principio de jerarquía no puede llevar a anular la autonomía del Fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus atribuciones. De ahí que se debe señalar que el artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público no puede implicar, de ninguna manera, que los Fiscales de menor jerarquía se conviertan en una suerte de “mesa de partes” de sus superiores.

En tal contexto, la autonomía que gozan los fiscales debe responder al nuevo modelo procesal penal, en el cual como titular del ejercicio de la acción penal y director de la investigación, su decisión no debe estar sujeta a la de otra institución o cualquier elemento externo que implique presión alguna; empero, en el marco legal preestablecido aislando cualquier interferencia o injerencia.

4.1.1. ROL DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

El principio acusatorio presupone, en esencia, la separación de funciones entre los órganos públicos encargados de acusar y de decidir la causa penal; esto es, el fiscal es quien detenta la persecución penal pública y el juez quien se encarga de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Empero, la adopción del principio acusatorio importa más que esto, exige que quien investiga sea aquel que detenta la función acusadora.

En efecto, el sistema acogido en el CPP del 2004 pretende reducir al máximo las facultades discrecionales del juzgador, limitando su

actuación a una función juzgadora y garantista, de ahí que se diga con corrección que se constituye en un Juez de Garantías; claro está reservando en el principio de jurisdiccionalidad la imposición de medidas coercitivas y medidas limitativas o restrictivas de derecho. Dicho de otro modo: un sistema procesal que se sostiene fundamentalmente en la imparcialidad, objetividad e independencia del órgano jurisdiccional debe despojar al juzgador de cualquier atribución que importe poner en riesgo dichos principios fundamentales.

En tal medida, resulta adecuada y pertinente la atribución directriz de la investigación preparatoria a la figura del fiscal. Esta configuración la asume el nuevo CPP en el inciso 1) artículo IV de su título preliminar, cuando establece lo siguiente: "El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio".

La investigación del delito en su fase preliminar es la base fundamental de todo el procedimiento penal, pues, a partir de su concreción fáctica, el persecutor público está en posibilidad de acopiar todo el material probatorio de cargo, destinado a la probanza del injusto penal y de la responsabilidad penal del imputado o, en su defecto, a abstenerse la intervención del poder punitivo del Estado, cuando dicha investigación demuestra la irrelevancia jurídico –penal de la conducta imputada a una inminente insuficiencia de pruebas.



Bacigalupo (1994) Se puede deducir entonces con propiedad que, la investigación preparatoria prepara el camino para el juicio oral y de cierta forma, delimita el objeto del juzgamiento, en la medida que lo ejecutado y realizado en esta fase por el agente fiscal condicionará el contenido de su acusación. Es en la investigación preparatoria donde el persecutor oficial deberá adquirir u obtener medios de prueba.

Adquisición probatoria que se materializa con las medidas limitativas y restrictivas de derecho que el CPP del 2004 ha comprendido normativamente en el Título III del Libro Segundo.

En ese sentido, podemos definir a la investigación preparatoria como la fase del procedimiento en la cual se realizan y ejecutan una serie de actos de coerción y de restricción, destinados fundamentalmente al recojo y acopio de pruebas que puedan sostener en la etapa intermedia la pertinencia de llevar a juzgamiento un caso que revela suficientes indicios objetivos de criminalidad, o en su defecto, la imposibilidad de llevar a juzgamiento una causa que no se adecua con los elementos materiales que exige la legalidad para llevar a cabo la culminación del ejercicio persecutorio estatal.

Los actos de investigación son aquellos que se realizan en la fase sumarial, o con anterioridad a la misma, pero con carácter preventivo con el fin de verificar las específicas funciones de esta fase del procedimiento pena. El inciso 1) del artículo 321º del CPP del 2004, establece que la investigación preparatoria persigue reunir los elementos



de convicción, de cargo o de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado reparar su defensa.

Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa; las circunstancias o móviles de su perpetración; la identidad del autor, o partícipe, y de la víctima, así como la existencia del daño causado; todo con miras a fundamentar la acusación o cualquiera otra decisión conclusiva. Por esta razón la investigación se dirige a establecer la efectividad del hecho imputado, con todas las circunstancias de personas, cosas o lugares; identificar a los testigos del hecho investigado y consignar sus declaraciones, y, en general, recoger todos los antecedentes que puedan servir para tomar la decisión acerca del curso de la persecución penal.

Bacigalupo (1994) La investigación tiene entonces por finalidad, reconstruir el hecho punible desde sus diversas aristas relacionadas con los elementos compondores de tipicidad, autoría y participación; contenido del injusto, circunstancias modificativas de responsabilidad (atenuantes y agravantes, etc.). Claro está, que si bien el éxito del proceso está condicionado a la eficacia de la investigación, no por ello esta actividad podrá desconocer los derechos fundamentales del imputado.

Con ese objeto las fuerzas policiales realizan la investigación. Empero, fue la Ley Fundamental de 1993 que recogió la función del Fiscal desde una técnica legislativa más depurada y a partir de una terminología

más adecuada, señalando que corresponde al Ministerio Público conducir desde sus inicios la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

Por lo tanto, de dicha prescripción se colige lo siguiente:

1. Es el Ministerio Público -como titular de la acción penal-quien asume la conducción directriz de la investigación criminal desde sus inicios, consagrándose esta manera el principio acusatorio en el sistema procesal penal.
2. El Ministerio Público –como director de la investigación criminal- es la institución encargada de programar de delinear la estrategia de investigación, y para tal fin se sirve de los órganos especializados en criminalística de la Policía Nacional: por consiguiente, el órgano policial se somete a los mandatos del agente fiscal en este ámbito.
3. El Fiscal no solo es el funcionario público encargado de pronunciar la persecución penal, sino también de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, controlando y vigilando la actuación policial.

Carbonelli (1999) De todos modos, la Constitución Política del Estado solo configura los principios sobre los cuales debe desarrollarse la política criminal en el ámbito de la persecución penal. La Constitución no contiene en su seno una política criminal concreta ni, por tanto, establece



unos criterios fijos; si así lo hiciera dejaría de ser el instrumento básico regulador de la convivencia democrática y pluralista para convertirse en un programa político partidista; pero í marca unas líneas programáticas generales y contiene un sistema de valores que no puede ser contradicho.

En efecto, el legislador se quedó en medio camino, pues no adecuó normativamente el Código de Procedimientos Penales de 1940 a la nueva configuración de la persecución penal que revelaba la Ley Fundamental. No olvidemos que el cuerpo adjetivo en la fase de instrucción (investigación). Dicho en otras palabras: si bien el marco jurídico – constitucional le había conferido al Ministerio Público la dirección de la investigación criminal existía un vacío legal en cuanto a los instrumentos y elementos que debía contar esta institución para poder desarrollar de forma cabal este rol fundamental. Por consiguiente, si bien la Carta Política consagrada el principio acusatorio en toda su dimensión formal, la normatividad específica no recogía el mandato constitucional en toda su amplitud.

Con todo, el marco político criminal esbozado significó un paso fundamental hacia la configuración de un marco legal sostenido fundamentalmente en el principio acusatorio. De esta forma se separa tajantemente las funciones de acusar e investigar de aquellas estrictamente decisorias; las primeras atribuidas al órgano persecutor público y las segundas reconocidas exclusivamente en el juzgador. El proceso penal podrá denominarse “democrático” cuando más nítidas y



tajantes sean las separaciones entre las funciones del órgano requirente con las del órgano decisorio.

Sin embargo, esta separación no adquiere aún la amplitud de las facultades de investigación en monopolio del Ministerio Público. Pues, según las normas vigentes, el juez penal aún realiza función investigadora. Estado de cosas que es corregido por el CPP del 2004. Tal como se expuso en líneas precedentes.

Asimismo, en concordancia con la Ley N° 27379 se sanciona la Ley N° 27399, ley que faculta al Fiscal de la Nación la realización de investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99° de la Constitución Política. Estableciéndose en su artículo 2° que los funcionarios públicos mencionados en la normatividad anotada pueden ser objeto de las medidas limitativas de derecho, previstas en la Ley N° 27379. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del artículo 93° de la Ley Fundamental con respeto a los Congresistas de la República. En efecto, en sujeción al escalafón funcional o el grado jerárquico del investigado, la atribución de investigar estos presuntos actos delictivos, le corresponden por antonomasia a quien ejerce la máxima investidura en el órgano persecutor del delito.

El Fiscal de la Nación –como máxima autoridad política, administrativa y funcional- del Ministerio Público adoptará las medidas



limitativas que sean necesarias para el aseguramiento de las pruebas así como la puesta a disposición del imputado al órgano jurisdiccional. Esta actuación se circunscribe a los delitos de función (infracción de deber), aquellos que se cometen en prevalimiento del cargo ejercido y que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos de naturaleza institucional (v.gr. delitos contra la Administración Pública y contra la administración de justicia); pues, en el caso de la presunta comisión de injustos penales comunes, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 93º de la Constitución Política.

Debe agregarse en este nivel, la Ley N° 27380 del 21/12/2000, que incorporó los artículos 80-A y 80-B (articulado reglamentado por la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 009-201-MP-FN-JFS del 28/02/201) en la LOMP, confiriéndose al Fiscal de la Nación de la designación de equipos de fiscales para la investigación de casos complejos, en razón a la gravedad del injusto presuntamente cometido, por la cantidad de agraviados, por dificultades probatorias por conexión delictiva, en suma, por criterios políticos criminales. De todas maneras, en el ámbito estrictamente constitucional, debe reformarse el artículo 100º, a fin de reivindicar la titularidad de la acción penal al Fiscal de la Nación en el ámbito de las investigaciones a altos funcionarios del Estado.

En este orden de ideas, debe también destacarse la Ley N° 27934 del 12/02/2003, Ley que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. Regulándose una serie de circunstancias y mecanismos procesales que permita una adecuada



coordinación e interacción de ambas instituciones públicas. No olvidemos que la persecución penal pública y la investigación criminal son tareas que se encomienda de forma compartida al Ministerio Público y a la Policía Nacional. De otro lado este cuerpo de normas (artículo 2º), faculta al Fiscal de solicitar al juez las medidas de coerción personal previstas, en los artículos 135º y 143º del CPP de 1991. Con todo, esta regulación normativa, presupone la consagración del principio acusatorio en la etapa preprocesal.

Por otro lado, si bien la investigación constituye la matriz del proceso penal, no por ello desplaza a la etapa de juzgamiento, su función probatoria, pues el acto de condena penal debe ser el corolario de la actuación probatoria llevada a cabo en un juicio oral público y contradictorio; quiere decir que la condena penal no puede basarse en actuaciones de orden sumarial. En el modelo adversarial la investigación adquiere su verdadero papel de simple preparación de la acusación del fiscal y el juicio oral cobra su verdadera dimensión como eje central del proceso penal y único escenario para la práctica de la prueba, salvo supuestos excepcionales (prueba preconstituida y anticipada).

Para Gimeno Sendra (1996) se hace preciso, tanto actualizar los supuestos de prueba sumarial anticipada (por ejemplo, incluyendo en ellas las declaraciones de testigos expuestos a coacciones, en el artículo 392º. 1.b. del CPP italiano) y, en general, perfeccionar su procedimiento de entrada en el juicio oral a través de la lectura de documentos; al respecto el CPP del 2004 ha previsto en el artículo 325º que las

actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Para los efectos de la sentencia tiene carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con el artículo 242º y siguientes, las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este código.

4.2. CUMPLIMIENTO DEL ROL DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO CONFORME AL ARTÍCULO 159 INCISO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993

Bernales (2012). Conducir la investigación es un deber del Ministerio Público conforme al artículo 159 inciso 4 de la Constitución, en tal sentido su actuación comienza en la fase de investigación preliminar, de la cual es su titular como encargado de la conducción de la investigación, fase importante que ante una noticia criminal se investigue y en su caso se pronuncie sobre la facultad de ejercitar la acción penal que debe ser ejercida a la luz de los principios y derechos fundamentales, depende de la conducción de la investigación a efectos de establecer la continuación o no de la promoción de la acción penal pública, lo que implica la obtención de elementos suficientes que ameriten la formalización de la denuncia y la prosecución de una causa penal probable, extremo que es de suma importancia, toda vez que los justiciables esperan del Ministerio Público que conduzca la

investigación de manera tal que objetivamente establezca si es pertinente o no proseguir con una investigación y en su caso forzar un juicio oral, ello teniendo en cuenta que compete al Ministerio Público la conducción de la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal, lo que exige, además un nivel de conocimiento jurídico acorde a la investidura que tiene ello a fin de la búsqueda de los elementos probatorios que permitan acreditar la comisión de un hecho delictivo.

4.2.1. FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Calderón (s.f.). Se puede definir la investigación preparatoria como un acto no jurisdiccional y unilateral del titular de la acción penal (Fiscal) que determina el inicio de una investigación formal contra determinada persona, cumpliendo una función de garantía, puesto que permite al imputado un conocimiento cierto de la imputación y comienza, inevitablemente, la actividad de su defensa.

En el nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal tiene, ante el conocimiento de la noticia criminal, varias posibilidades de actuación:

- a) Investigar por sí mismo, que implicaría realizar algunas diligencias de indagación en su Despacho.
- b) Requerir a la policía para que realice las diligencias preliminares bajo su dirección. En ese caso se elaborará un informe policial.

Efectuadas las diligencias preliminares, el fiscal evaluará los requisitos de procesabilidad, siendo posible que adopte las siguientes determinaciones:

- Si el hecho denunciado no es delito, no es-justiciable penalmente, o existen causa de extinción de la acción penal, declarará que no procede formalizar investigación y dispondrá el archivo de lo actuado.
- Si no se ha individualizado o identificado a los presuntos autores o partícipes, ordenará la intervención de la policía para dicho fin.
- Si falta un requisito de procedibilidad que depende del denunciante, reservará la investigación provisionalmente. Si el agraviado o denunciante no está de acuerdo con la decisión del Fiscal de archivar las actuaciones o reservarlas provisionalmente, requerirá al Fiscal para que en el plazo de cinco días eleve las actuaciones al Fiscal Superior.

Ante la decisión del archivo de la denuncia, el Fiscal está impedido de promover una investigación preparatoria por los mismos hechos, salvo que existen nuevos elementos de convicción o no se haya realizado una debida investigación. En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional peruano, que indicó que si bien las decisiones de la fiscalía no están

revestidas de la calidad de cosa juzgada, sí tienen la calidad de cosa decidida, siendo factible que sólo cuando la investigación presente un déficit o falta de elementos de prueba se pueda reabrir la investigación preliminar (STC. N° 2725-2008-HC/TC)

- Si, de acuerdo con el artículo 336° del nuevo Código Procesal Penal, el Fiscal tiene indicios reveladores de la existencia del delito, la acción no ha prescrito, se ha individualizado al imputado, y se ha satisfecho los requisitos de procedibilidad en los casos que lo requiera, dispondrá la formalización de la investigación preparatoria. A decir de Duce y Riego, esta decisión es fundamentalmente de carácter estratégico, dado que ofrece el Fiscal la posibilidad de obtener autorizaciones judiciales para medidas o diligencias que suponen una restricción importante de los derechos del imputado.

La formalización de la investigación constituye un acto de promoción o de impulso de la investigación preparatoria, que contiene la imputación, pero no la pretensión punitiva, pues, ésta recién se plantea en la acusación con un suficiente caudal probatorio. La imputación es la atribución de la comisión del hecho que la ley penal califica como delito a una o varias personas. Debe precisar los hechos, debe contener todo aquello que constituye delito, sin recortes ni limitaciones y sin omitir a ninguno de los autores o partícipes.

El nuevo Código Procesal Penal establece que la disposición del Fiscal de formalización de la investigación debe contener:

- a) La individualización o identificación del imputado.
- b) La exposición de los hechos: la secuencia como se ha realizado el hecho delictivo (preparación, ejecución y sus resultados), es decir, todo lo que se conozca sobre el delito y sus consecuencias, así como la imputación asertiva, no condicional o condicionada.
- c) Tipificación del delito. Este presupuesto en la denuncia penal es de suma importancia ya que el Fiscal califica jurídicamente los hechos, encuadrando la conducta en el tipo penal correspondiente. Lo novedoso en el nuevo Código Procesal Penal es la posibilidad de consignar tipificaciones alternativas. Esta labor de tipificación determina la exigencia de consignar la disposición legal aplicable.
- d) La individualización del agraviado, si fuera posible.
- e) Las diligencias que de inmediato deben actuarse.

La formalización de la investigación preparatoria efectuada por el Fiscal tiene dos efectos fundamentales:

- a) Comienza a computarse el plazo de investigación preparatoria.



- b) Suspender el curso de la prescripción de la acción penal. En una interpretación sistemática, se trataría más bien de una interrupción de la prescripción, tomando en consideración lo regulado por el artículo 83º primer párrafo del Código Penal que establece: La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Sin embargo, mediante el Acuerdo Plenario N° 1-2010, se establece como una causa sui generis de suspensión que el plazo de prescripción deje de correr desde este acto procesal hasta que se obtenga una sentencia o resolución firme que pongan fin al proceso, siendo el sustento para una interpretación de esta naturaleza darle eficacia a la persecución penal.
- c) Necesaria intervención de la autoridad judicial. Corresponde comunicar de esta disposición al Juez de la Investigación Preparatoria, que constituye un Juez de garantía y cumple la función de observador imparcial. Solamente actuará en caso de que se estén afectando las garantías fundamentales de los intervinientes. No tiene, en cambio, ninguna potestad de juzgar o expedir sentencia, salvo en el proceso de Terminación Anticipada.

Al Juez de la investigación preparatoria o le corresponde calificar o evaluar la corrección de este acto, pero si controlar que la

formulación sea clara, precisa y comprensible. Dentro de este marco, podría pedirle al Fiscal que complete algunos datos.

4.2.2. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Neyra (2010). La investigación es la primera etapa del proceso y está dirigida a reunir los elementos de convicción necesarios para establecer la existencia del delito y la responsabilidad. Es la etapa de preparación para el ejercicio de la acción penal. Se caracteriza principalmente por la búsqueda de evidencia y la preparación de medios de prueba de cargo y de descargo. En el juzgamiento, en cambio, predomina la actividad de control, debate y valoración.

Los colombianos Cadavid Botero y Bedoya Sierra (2008) sostienen que es una fase de fortalecimiento compuesta de una sucesión de actos que se despliegan con el fin de recaudar los elementos de convicción requeridos para que el juez de conocimiento someta a valoración las pruebas y determine el grado de responsabilidad del procesado.

Entonces podemos señalar que tiene por función recoger el material para determinar, si el hecho delictivo se ha cometido, quién es el autor y cuál su culpabilidad. Es una etapa que implica un conjunto de actos llevados a cabo por la autoridad competente, que se dirigen a averiguar por quién y cómo se ha cometido un determinado delito y adquirir cualquier otro elemento necesario

para la comprobación de la verdad, y se lleva a cabo antes del debate. Este el concepto que correspondería a la instrucción en el sistema procesal que abandonamos, que confundía las funciones de investigación con las jurisprudenciales.

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

San Martín (2006). La investigación preparatoria reviste las siguientes características esenciales:

1. ES DIRIGIDA O CONDUCTIDA POR EL FISCAL

Siendo el Fiscal es el titular de la carga de la prueba, le corresponde conducir esta etapa, puesto que, debe indicar el hecho de suministrar sus evidencias que permitan destruir la presunción de inocencia. Esta característica corresponde al sistema acusatorio. El Fiscal dispone de la actuación de diligencias conducentes a esclarecer los hechos por si mismo o a través de la policía. Además, puede requerir el apoyo técnico y de otras autoridades o funcionarios. Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido, como límite, que la actuación fiscal se rige por un principio de proscripción de la arbitrariedad, es decir, que no se realice fuera de los parámetros establecidos en la Ley, esto es, de modo desproporcionado.

La actuación del Fiscal también está guiada por su deber de objetividad que se consagra en el Título Preliminar del Nuevo

Código Procesal Penal, y que en términos prácticos se traduce en tener en cuenta la evidencia de descargo para construir, corroborar o descartar sus hipótesis, o el descubrimiento que haga sobre ella en el momento que considere pertinente.

2. TIENE CARÁCTER RESERVADO

Sólo quienes intervinieron en el proceso pueden conocer todo lo que ocurre en la investigación, pero no los extraños. Existe en este punto un avance importante en el nuevo Código Procesal Penal, que se inspira en el principio de «igualdad de armas». Se permite que en cualquier momento las partes puedan obtener copia simple de las actuaciones efectuadas para efectos de la defensa. La investigación no está al alcance de todos, puesto que, la publicidad podría afectar el éxito de la investigación. Por esa misma razón se autoriza al Fiscal a disponer que se mantenga en secreto algún documento o actuación por un plazo de veinte días, plazo que puede ser prorrogado por el Juez de la Investigación Preparatoria.

3. PERMITE DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE LA IMPUTACIÓN

En esta etapa no se ejecutan actos de prueba, sino sólo de investigación. Estos actos permiten sustentar la imputación y algunas decisiones del proceso como la limitación de derecho o

medidas de protección. No tiene valor para generar certeza o convicción y sustentar una sentencia.

4. SE SUJETA A UN PLAZO DETERMINADO

a) **Procesos que no son complejos.** El plazo de la investigación preparatoria será de ciento veinte días naturales. Por causas justificadas puede prorrogarse hasta por sesenta días, por una sola vez.

b) **Procesos que son complejos.** Son aquellos que requieren una cantidad significativa de actos de investigación o comprendan numerosos delitos, pluralidad de imputados o agraviados, que involucren a integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones criminales, o que importen las realización de pericias que impliquen la revisión de nutrida técnicas, que requieran de la realización de gestiones de carácter procesal fuera del país en los que se tuviera que revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. El plazo de investigación preparatoria será de ocho meses. La prórroga por igual plazo deberá concederla el juez.

4.2.4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Sánchez (2009). Una novedad del Nuevo Código Procesal Penal es la introducción de la oralidad y la contradicción durante la

primera fase del proceso mediante la realización de audiencias preliminares, que constituyen el escenario para la adopción de decisiones judiciales que implican control de ciertos presupuestos legales. Éstas serán ordenadas y dirigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria con la intervención de las partes.

Oralmente se debatirá y resolverá en ellas los siguientes:

- Medios de defensa, nulidad de transferencias, declinatoria de competencia, tutela de derechos del imputado, estado de inimputabilidad, anomalía psíquica sobrevenida, reexamen judicial de la incautación postal, reexamen judicial de la intervención de comunicaciones telefónicas, prueba anticipada, convalidación de la detención preliminar, prisión preventiva, prolongación de la prisión preventiva, revocatoria de la comparecencia, cesación de la prisión preventiva, internación preventiva, suspensión preventiva de derechos y control de plazos.
- La contradicción se observa dentro de las diligencias propias de esta fase, puesto que, se permite la asistencia de otros sujetos procesales, a los que se permite participación con sus respectivas alegaciones. Tal vez la excesiva formalidad que se otorga a estos actos procesales hace que se pierda de vista que estas audiencias deben ser bastante sencillas, dinámicas y breves. Los jueces de investigación preparatoria asumen un rol

de director de debates y, realizado el intercambio de información entre los involucrados, debe decidir.

- El juez de la Investigación Preparatoria instala la Audiencia y primero concede la palabra a la parte que hizo el requerimiento, a fin de que exponga brevemente su petición y sus fundamentos, para luego, dar la palabra a la contraparte para que presente sus argumentos; luego, decide en el mismo acto o dentro del plazo establecido. El Juez debe cuidar que la audiencia no se extienda innecesariamente o que se convierta en una anticipación del juicio oral, un mini juicio o prejuicio.

4.2.5. DILIGENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Rosas (2009). Uno de los mayores problemas del modelo anterior, era la reproducción de las mismas actuaciones o diligencias en las distintas etapas del proceso.

En el nuevo Código Procesal Penal, las diligencias preliminares no pueden repetirse. Sólo procede su ampliación cuando la diligencia adolezca de un grave efecto en su actuación o que deba complementarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos.

Entre las diligencias a realizarse, tenemos las siguientes:

- ❖ Manifestaciones del imputado, agraviado, testigos y peritos que puedan informar o emitir dictámenes sobre los hechos. Su concurrencia es obligatoria. Ante la inasistencia injustificada, el Fiscal puede disponer su conducción compulsiva.
- ❖ Requerimiento de informes a particulares o funcionarios públicos.
- ❖ Diligencias que las partes hubieran requerido para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se pueden realizar actos especiales de investigación como:

- a) **Circulación o entrega vigilada de bienes delictivos.** Consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen en el territorio o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito.
- b) **Interceptación o apertura de envíos postales sospechosos de contener bienes delictivos.** Esta medida, que se considera atentatoria de un derecho fundamental, se puede dar en forma excepcional, a pedido del Fiscal y por mandato del Juez de la Investigación Preparatoria.



c) Agente encubierto. Es posible este medio especial de investigación cuando se trate de delincuencia organizada. Es indispensable que el agente sea policía, que se genere documentos de identidad y que se registre ante el Fiscal de la Nación.

Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal prevé la figura del "agente especial", esto es, un ciudadano que se encuentra inmerso en la organización y opera para lograr evidencia incriminatoria.

Los bienes delictivos a los que se hace mención corresponden a drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, materias o insumos para la elaboración de las mismas, bienes que correspondan a delitos aduaneros, provenientes del lavado de activos, entre otros.

En estas actuaciones ante el Fiscal, es posible la participación de los sujetos procesales que así lo requieran, salvo que perjudiquen el éxito de la investigación o impidan la regular y pronta actuación de la misma.

Tiene el Fiscal, en dichas diligencias, facultades disciplinarias a fin de mantener el orden y normal desarrollo del acto procesal. La nueva normatividad le otorga facultades de sanción, tales como excluir a las personas en cualquier momento o, en casos extremos, utilizar el apoyo de la fuerza pública.

4.3. MINISTERIO PÚBLICO Y LAS DEFICIENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Es evidente que en la Provincia de Puno, se tiene que, actualmente se afronta un grave problema en el proceso de la investigación de la criminalidad en esta jurisdicción por parte del Ministerio Público.

Esta situación se presenta en la etapa investigatoria porque mayormente los Fiscales no encuentran elementos suficientes (pruebas) para pasar a la siguiente etapa. En otras palabras, son la falta de asumir mayor responsabilidad en las diligencias preliminares, al no encontrar los Fiscales elementos suficientes de convicción para acusar por la falta de suficiencia probatoria. En otros casos, se debe al desborde de la criminalidad, pues, los Fiscales tienen una excesiva carga que les impide cumplir satisfactoriamente y con eficiencia la investigación de la criminalidad.

A estos aspectos se pueden añadir las siguientes:

- a) Incremento y desborde la delincuencia común y el crimen organizado en toda la Región Puno, lo que se manifiesta también a nivel nacional.
- b) Deficiente formación especializada en criminalística y criminología de los Fiscales que asumen la responsabilidad de investigación los diferentes hechos criminales a su cargo.



- c) Actos de corrupción en los operadores de la investigación, tanto en la Policía nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta situación se manifiesta reiteradamente en la región y a nivel nacional.
- d) Incomprensión del significado garantista del nuevo modelo procesal penal, pues, se sobredimensiona la protección de la delincuencia bajo el pretexto del respeto por el "debido proceso" y los derechos humanos.
- f) Ausencia de participación de los otros organismos del Estado y la sociedad en la lucha de la criminalidad, por ejemplo, el Gobiernos Regional, Municipalidades, sectores relacionados a la educación, etc.
- g) Carencia de uniformidad de criterios entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, dándose la sensación de ser instituciones diferentes frente a un mismo problema, así como generar mayor grado de confianza recíproca.
- h) Carencias logísticas de las fuerzas del orden y el Ministerio Público, por ejemplo, la falta de un laboratorio implementado con instrumentos y técnicas de última generación para acelerar la investigación de muchas pruebas. Actualmente, los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional realizan las investigaciones en forma empírica.
- i) Contrato de Fiscales adjuntos sin experiencia alguna en criminalística y criminología sin conocer su perfil profesional, desde luego, con las excepciones del caso.

j) Carencia de personal especializado, en las diferentes Unidades Especializadas, principalmente en Criminalística, para atender los diferentes peritajes en casos de homicidios, y otros ilícitos penales, de gran connotación, genera un retraso en las investigaciones y por consiguiente el comentario desfavorable a la función policial. La falta de medios logísticos para que el personal policial se movilice, especialmente en zonas rurales y centros poblados alejados de más de dos días de camino de herradura, no ha permitido en algunos casos la culminación satisfactoria de investigaciones policiales, registradas en las Comisarías y Jefaturas Especializadas.

4.4. EL FACTOR DE NATURALEZA JURÍDICA NORMATIVA COMO CAUSA QUE INFLUYE EN EL ACTUAR DEFICIENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

Peña (2011). Es ineludible reconocer el orden jurídico como una causa que influyen en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, en tal contexto resulta necesario analizar la problemática de la administración de justicia, ello en lo referente a la parte adjetiva o procesal. La antigua Constitución de 1979 consideraba al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional en capítulos separados, determinándoles a cada uno diferente ámbito funcional de actuación en aras de optimizar la administración de justicia en el país; de dicho ámbito funcional daba lugar a una sociedad donde se producían detenciones arbitrarias,



sobrepoblación en los penales, falta de celeridad procesal y conculcación de derechos de las partes.

Este Sistema sufrió continuas modificaciones, medidas que no lograron el objetivo principal que era la obtención de una sentencia justa y oportuna, originando la acumulación de expedientes en las diferentes instancias, debido al exceso de trabajo, incumplimiento de los términos legales, exceso de carga y reiteración de diligencias. Circunstancias que motivó la adopción de mayores cambios para dar solución al problema suscitado en la administración de justicia, nombraron diferentes Comisiones de estudios y revisión de la problemática procesal penal en el país, con miras de esquematizarlo y dictar un nuevo Código Procesal Penal, en base al respeto irrestricto de los Derechos Humanos y acorde a la evolución jurídica, social y política del país, enmarcando en el ámbito internacional.

La aprobación del Decreto Legislativo N° 957 confiere una mayor presencia garantista del Ministerio Público en las diferentes etapas del Proceso Penal, dejándose de lado la reiteración de diligencias que dilataban el proceso, como aquellas a cargo del Juez Penal durante la Etapa de la Instrucción (instructiva, inspección ocular, etc.).

Es insoslayable tener en cuenta que la Constitución Política establece como función del Ministerio Público intervenir en la investigación del delito y promover la acción penal de oficio o a petición de parte, remarcándose que se reconoce constitucionalmente como una



etapa del proceso la investigación policial pero a condición de que se haga con la participación del Ministerio Público y sea éste el que promueva la acción penal.

Que la referencia que hace la Constitución y el espíritu de dicha norma le da al fiscal un rol dinámico y activo en el proceso. Advirtiéndose que con la aplicación del nuevo sistema procesal penal se prevé con nitidez el ejercicio diferenciado de la potestad persecutoria del delito y la potestad jurisdiccional, por lo tanto se respeta las garantías de la administración de justicia declaradas en la Constitución. De esta manera el Ministerio Público asumirá plenamente su función de titular exclusivo del ejercicio público de la acción penal y podrá cumplir a plenitud su deber de carga de la prueba, conforme lo establece su Ley Orgánica.

Neyra (2010). La potestad jurisdiccional será competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales, de tal modo que la jurisdicción se concretará en dos niveles o etapas: en la etapa investigatoria solamente como juez de garantías; y posteriormente, en la etapa subsiguiente del juzgamiento, será ejercida a plenitud, jurisdicción plena.

Se reserva al Juez todo aquello que por imperativo de la Constitución es objeto de resolución jurisdiccional, como ocurre tratándose de medidas cautelares (orden de detención del imputado, mandato de libertad, embargo, incautación, allanamiento y otros. Sin embargo, no siempre el ordenamiento jurídico es perfecto, tal es así que con la dación del Nuevo Código Procesal, seguramente existen

deficiencias, no solo de concepto sino también de interpretación en los operadores jurídicos, y más aún existen problemas de aplicación, lo que obviamente genera deficiencias en la propia actuación de los operadores, en este caso en específico en los fiscales, tal es así, al entrar en vigencia el Código, en bastantes casos no se ha comprendido a cabalidad la naturaleza u orden jurídico preestablecido en esta norma y que ha significado un actuar deficiente que de cierto modo trae como consecuencia desventajas en la persecución del delito.

4.5. EL FACTOR DE NATURALEZA HUMANA Y MATERIAL COMO CAUSA QUE INFLUYE EN EL ACTUAR DEFICIENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Este factor también se constituye como uno de los que influyen para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. En torno al aspecto humano, es conveniente tener en consideración que en acepción de muchas personas el aspecto humano puede convertirse en el principal obstáculo para la aplicación de la ley adjetiva materia de análisis. Las novedades que trae consigo el nuevo Código Procesal Penal permiten inferir que no siempre las interpretaciones de su texto serán coincidentes con el espíritu de la norma, tal cual se aprecia en la propia exposición de motivos respectiva, situaciones que de cierto modo generan consecuencias y también la existencia de problemas que afectarían necesariamente la labor importante y tan delicada, cual es la investigación del delito a cargo del Ministerio Público.

Dentro del factor humano no puede dejarse de lado el nivel de conocimiento que tienen las personas con responsabilidad de la investigación de delitos, en este caso los fiscales, factor trascendental de particular importancia, máxime si el Ministerio Público cuenta con Abogados con cierto conocimiento sobre el ordenamiento jurídico, en especial en materia penal; pero en lo sustancial no cuentan con técnicas de investigación.

En tal sentido, se advierte que el desempeño de los fiscales en la investigación del delito, debe guardar coherencia con el nuevo sistema procesal penal, ello por la importancia que tiene el conocimiento que deben tener del sistema y el aporte del mismo, de lo contrario, si no tiene preparación técnica para investigar es difícil que pretenda dirigir esta labor, al igual que querer hacerlo sin tener el fundamento o conocimiento legal. Sumado a ello, el personal del Ministerio Público, en cuanto al número, no cubre las necesidades o expectativas actuales que demanda el sistema, el problema se agudiza en zonas rurales, donde la distancia y dificultades en la comunicación son mayores.

Es insoslayable poner énfasis, el presupuesto de dicha institución, que obviamente se trasluce en la deficiencia en infraestructura, bajos sueldos de los trabajadores de la institución, ausencia de laboratorios en criminalística, carencia de tecnología, entre otros que sin lugar a dudas hacen imposible el cumplimiento de la tarea específica que tiene asignada constitucionalmente. Incidiendo en la infraestructura con la que cuenta el Ministerio Público, esta no es la más adecuada, toda vez que en la

mayoría de casos son locales alquilados, pudiendo concluir que estos locales no son los más satisfactorios. En lo referente a medios de transporte esta situación es también crítica para el desarrollo de sus diligencias propias de sus cargo, y en otros casos, las efectúan utilizando vehículos particulares, situación esta que no garantizaría el eficiente cumplimiento de sus funciones.

4.6. EL FACTOR DE NATURALEZA HISTÓRICA COMO CAUSA QUE INFLUYE EN EL ACTUAR DEFICIENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Derecho & Sociedad (2008). Históricamente, tal como lo hemos señalado en los capítulos anteriores, la Policía ha cumplido su función ligada estrechamente a la investigación del delito, funciones que de cierto modo ayudaba de sobre manera la labor del Ministerio Público. Más aún durante mucho tiempo el Poder Judicial se ha valido de la Policía para alcanzar el grado técnico científico que le brinde tal sustento a los Atestados e Investigaciones, ello con la labor de criminalística; de esta manera, a la vez que se consideraba la investigación procesal como producto o ejercicio de la labor jurisdiccional y se reconocía una etapa previa de investigación Policial.

Con el avance de las ciencias y la aplicación de estas en la comisión de delitos; ha motivado que la Policía cuente con unidades especializadas ello para coadyuvar en la labor de persecución del delito; empero, la aplicación de métodos incompatibles con los Derechos

Humanos, dio lugar a la creación de mecanismos sociales para evitar el empleo de estos medios en la PNP. La Constitución de 1979 rescata la Institución del Ministerio Público y la incorporación a la investigación del delito. Participando entonces en ella la PNP que aporta la técnica y la ciencia y el Ministerio Público la parte legal y la garantía de trato justo al investigado, pero este cambio de cierto modo radical implica la existencia de situaciones, que de una u otra manera afectan el proceso de investigación de delitos, máxime si en la cual constitución de 1993 le otorgan al Ministerio Público la conducción de la investigación, aspecto refrendado por el Nuevo Código Procesal Penal, al respecto es de rigor preguntarse si para tal función asignada estaban preparados o no, respuesta difícil, topa vez que por historia dicha función no era entera responsabilidad de este organismo, lo que ciertamente trae un costo social que es la deficiencia en la persecución del delito.

4.7. FACTORES DE NATURALEZA JURÍDICA, HUMANA, MATERIAL E HISTÓRICA QUE INFLUYEN EN LA DEFICIENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Conforme se tiene expuesto en los párrafos precedentes, existen muchos factores que tienen incidencia directa en la persecución del delito que obviamente, también en el incremento de la criminalidad en la Provincia de Puno, por consiguiente, existe la imposibilidad de dar cumplimiento al mandato constitucional encargado al Ministerio Público y cumplir a cabalidad el nuevo modelo procesal, entre los que específicamente podemos mencionar entre algunos:



- Insuficiente número de miembros de la Policía Nacional del Perú en el Frente Policial de Puno. El número de policías no está acorde con el incremento de la población, es el caso de la provincia de Puno.
- Las leyes para sancionar a las personas que cometen delitos no son las apropiadas y las sanciones efectuados por el Poder Judicial son benignas.
- Los representantes del Ministerio Público no cumple con sus funciones eficientemente conforme a sus atribuciones prescritos en la Constitución y las normas procesales en lo que respecta a la investigación preparatoria, pues, se tiene que muchos delitos quedan impunes por la falta de una adecuada investigación con carácter científico.
- Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional del Perú en la comisión de delitos dentro de la Provincia de Puno son poco eficientes y en la mayor parte son superficiales.
- Las instituciones públicas y privadas no trabajan de manera coordinada para prevenir y contrarrestar el incremento de la delincuencia.
- La Policía Nacional del Perú, no cuenta con el personal suficiente y los implementos necesarios para cumplir con su función de manera eficiente. El déficit de efectivos policiales imposibilita la cobertura de servicios policiales en forma adecuada en el ámbito de la jurisdicción.



El déficit de personal en Frente Policial de Puno hace que las diferentes Comisarías de la jurisdicción cuenten con un número reducido de efectivos, lo que resulta insuficiente para atender los diferentes problemas que aquejan a los pobladores de su ámbito de responsabilidad; lo cual repercute en la operatividad y eficacia de las acciones policiales.

- Falta de Unidades Móviles para su distribución a las Comisarías rurales y para organizar una Unidad de Emergencia-105 en las Divisiones Policiales y Comisarías PNP.
- Insuficiencia del Parque Automotor, más si tiene en cuenta la gran amplitud de área de responsabilidad y lo agreste de la zona, para combatir el terrorismo, narcotráfico, delincuencia común, etc.
- Las unidades motorizadas no tienen un mantenimiento permanente, por la falta de un taller de Maestranza PNP, que permita tener un óptimo grado de operatividad de las unidades motorizadas.
- Tecnología obsoleta, que no guarda coherencia de la tecnología criminal.
- En esta parte final exponemos los resultados de una breve investigación que hicimos en base al uso de un cuestionario cerrado a fin de captar la percepción de los abogados para saber si el Ministerio Público y sus Fiscales cumplen a cabalidad los mandatos que prescribe la Constitución respecto a la persecución del delito y, si

aplican como es debido la investigación preparatoria con el cumplimiento del Nuevo Código Procesal Penal y sus atribuciones expuestos en el Decreto Legislativo N° 052 o Ley Orgánica del Ministerio Público. Del cuestionario aplicado a doscientos abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Puno, pues, consideramos que ellos más que nadie conocen en forma más objetiva como personas que se hallan en el ejercicio profesional la actual situación del problema de la criminalidad en la provincia de Puno y el comportamiento de los Fiscales. Consideramos que la muestra es representativa si consideramos que el número de abogados en actividad son aproximadamente unos cuatro mil en toda la Región. El cuestionario se aplicó durante los meses octubre y noviembre del 2012, principalmente en las ciudades de Puno y Juliaca.

4.7.1. EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

www.guia-urbana.com. La consecuencia más importante del incremento de la criminalidad, es la percepción generalizada de inseguridad, que se suma a las otras inseguridades que la vida en ciudad fomenta, como el desempleo, la salud, el futuro, la violencia familiar, el empobrecimiento, etc. Este sentimiento de inseguridad, lleva a un deterioro psicológico en las personas, al incremento de personal de seguridad particular, la limitación de poder circular en determinadas horas del día, la creación de una nueva tipología arquitectónica en las viviendas, basada en el refuerzo de los



elementos de seguridad. También se da un retraimiento en la inversión en ciudades y barrios considerados peligrosos.

Pérez (2004). Desde luego, otra consecuencia del incremento de la criminalidad, es el impacto de la inseguridad en los sectores pobres, que no poseen medio suficientes para defenderse de la criminalidad. El aumento en los costos de la seguridad, es una consecuencia muy negativa del aumento de la criminalidad. Otra consecuencia de este fenómeno es la aparición de infinidad de empresas privadas de seguridad, superando en muchos países, el número de agentes de seguridad privada al número de policías. Esto genera casos de abuso y corrupción, así como también, problemas de relacionados entre el sector privado y la policía.

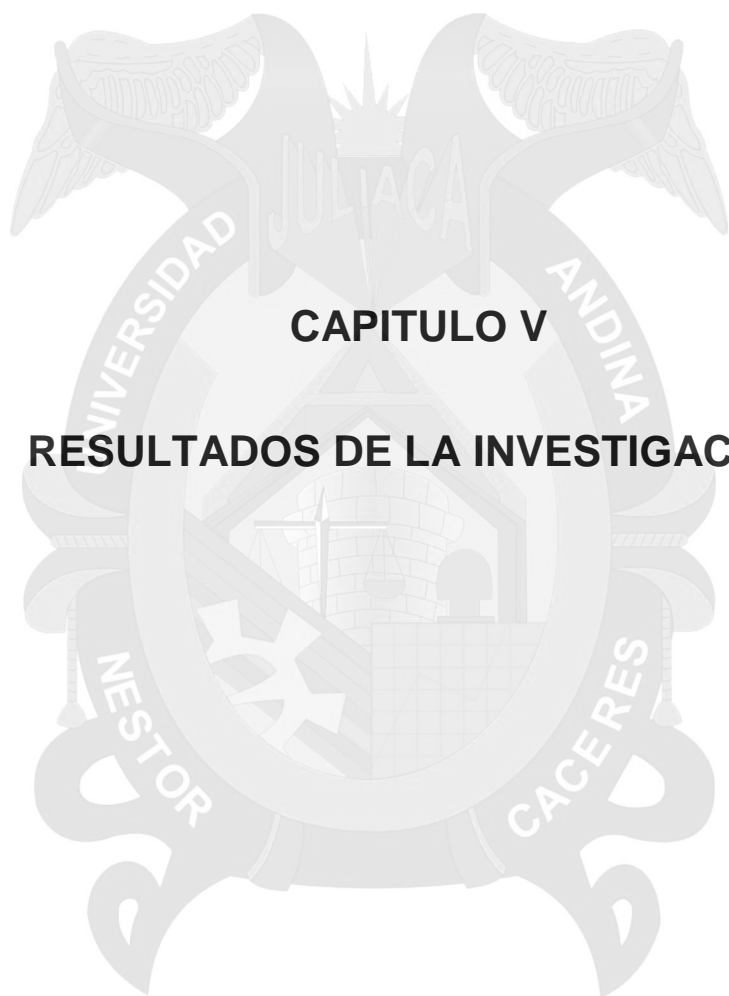
Para verificar el incremento de la criminalidad se ha creado el Observatorio de Criminalidad es un órgano técnico adscrito a la Fiscalía de Nación que se encarga de sistematizar, analizar y difundir información sobre la criminalidad, las infracciones a la ley penal y la violencia en el Perú, proporcionando información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño, implementación y evaluación de las políticas de prevención, persecución inteligente del delito y protección de la víctima.

Esta información está orientada al fortalecimiento de la política institucional del Ministerio Público ya que la información es



proporcionada por los fiscales y por los órganos de apoyo a nivel nacional, y una vez que ha sido analizada y sistematizada, es puesta a disposición de la Fiscalía de la Nación y de los fiscales de los 32 distritos judiciales. Del mismo modo, la información es difundida entre diversas entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, cuyas funciones u objetivos están vinculados a la seguridad ciudadana.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público fue creado el 15 de julio de 2005 mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1485-2005-MP-FN, integrando los sistemas del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), del Instituto de Medicina Legal "Leonidas Avendaño Ureta", de la Escuela del Ministerio Público "Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel" y del Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF), con la finalidad de promover el desarrollo de una red de información objetiva, confiable, oportuna y comparable que contribuya al diseño e implementación de políticas y programas que permitan combatir los fenómenos criminales y de violencia que impactan en el Perú. Esta organización inicial del Observatorio de Criminalidad se ha ido adaptando y especializando en función a las líneas de trabajo establecidas por la Fiscalía de la Nación y a los requerimientos de información del Ministerio Público.



CAPITULO V

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

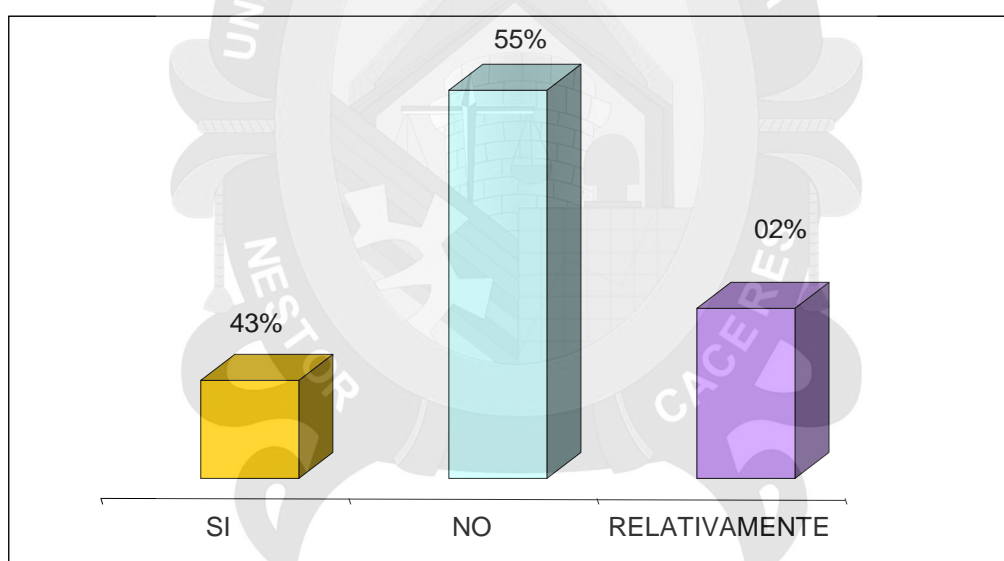
1. ¿EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE PLENA AUTONOMÍA CONFORME
PRESCRIBE EL ARTÍCULO 158º DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993?

TABLA Nº 1

Respuesta	Total	%
SI	86	43
NO	110	55
RELATIVAMENTE	04	02
Total	200	100 %

Referencia propia del investigador

GRÁFICO Nº 1



Referencia propia del investigador



ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 01

En la Tabla número 01 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó si ¿EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE PLENA AUTONOMÍA CONFORME PRESCRIBE EL ARTÍCULO 158° DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993? se ha obtenido como resultado que mayoritariamente 110 abogados que constituye un 55% de los abogados encuestados contestaron que no tiene plena autonomía y en un número menor de 86 abogados que representa el 43% dijo que sí tiene plena autonomía y un total de cuatro abogados que constituye el 02% de abogados encuestados dijeron relativamente. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que el Ministerio Público no tiene autonomía, consecuentemente asumimos que si bien es cierto, que por norma constitucional el Ministerio Público goza de autonomía; empero, en una medida significativa mayoritaria la percepción es negativa respecto a esta autonomía.

Postulamos que la percepción de los abogados respecto a la autonomía del Ministerio Público contenido en la carta magna es negativa, lo cual ha quedado demostrado con los resultados de la investigación.

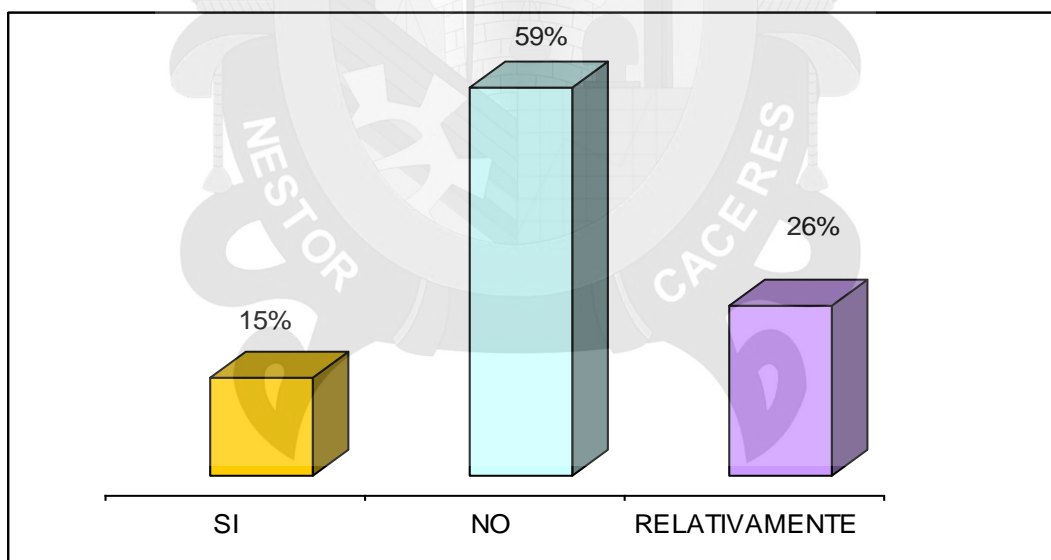
2. ¿EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS FISCALES EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PUNO CUMPLEN A CABALIDAD EL MANDATO DEL ARTÍCULO 159º INCISO 4 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN?

TABLA Nº 2

Respuesta	Total	%
SI	30	15
NO	118	59
RELATIVAMENTE	52	26
Total	200	100 %

Referencia propia del investigador

GRÁFICO Nº 2



Referencia propia del investigador

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 02

En la Tabla número 02 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó ¿si el Ministerio Público y específicamente los señores Fiscales en el ámbito de la Provincia de Puno cumplen a cabalidad el mandato del artículo 159° inciso 4 de la Constitución de 1993, esto es respecto al mandato constitucional, respecto a conducir la investigación del delito?, se ha obtenido como resultado que mayoritariamente un 59% (118) de los abogados encuestados contestaron que los Fiscales no cumplen a cabalidad lo prescrito en el artículo 159° inciso 4 de la Constitución y en un número menor que representa el 15% (30) dijo que sí y un 26% (52) abogados encuestados dijeron relativamente. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que el representante del Ministerio Público no cumple a cabalidad el mandato constitucional referente a la conducción de la investigación del delito, consecuentemente en una medida significativa la percepción es negativa respecto al cumplimiento de este rol constitucional del Ministerio Público, en consecuencia, se advierte inclinación a un nivel significativo de percepción negativa, de lo que hace inferir que los abogados mayoritariamente perciben el incumplimiento de esta función de los fiscales.

Si bien es cierto, este tema no ha sido abordado por los autores de nuestro país, toda vez que aún no se ha problematizado este tema, no obstante ello, postulamos que el nivel de aceptación del rol del Ministerio Público referido a la conducción de la investigación no es aceptado por los señores abogados, lo cual ha quedado demostrado con los resultados de la investigación.

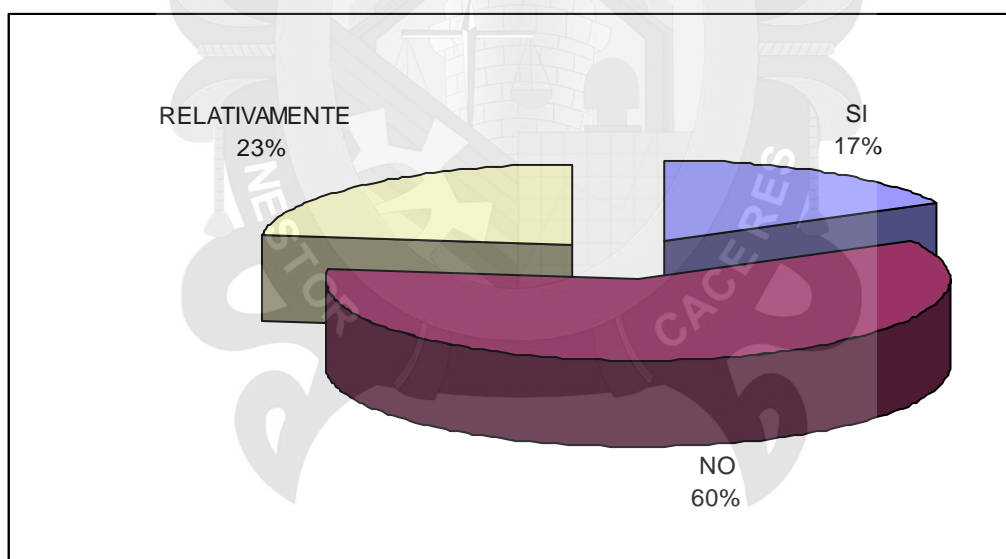
3. ¿EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS FISCALES CUMPLEN ACERTADAMENTE LOS MANDATOS EXPUESTOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 RESPECTO A LA PERSECUCIÓN DEL DELITO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PUNO?

TABLA Nº 3

Respuesta	Total	%
SI	34	17
NO	120	60
RELATIVAMENTE	46	23
Total	200	100

Referencia propia del investigador.

GRÁFICO Nº 3



Referencia propia del investigador.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 03

En la Tabla número 03 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó ¿CONSIDERA UD., QUE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS FISCALES CUMPLEN ACERTADAMENTE LOS MANDATOS EXPUESTOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 052 RESPECTO A LA PERSECUCIÓN DEL DELITO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PUNO?; se ha obtenido como resultado que mayoritariamente un 60% (120) de los abogados encuestados contestaron que los Fiscales no cumplen a cabalidad la persecución del delito y en un número menor de 34 que representa el 17% dijo que sí y un número de 46 que constituye el 23% de abogados encuestados dijeron relativamente. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que el representante del Ministerio Público no cumple a cabalidad el mandato contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, referente a la persecución del delito, consecuentemente en una medida significativa la percepción es negativa respecto al cumplimiento de este rol del Ministerio Público, en consecuencia, se advierte inclinación a un nivel significativo de percepción negativa, lo que hace inferir que los abogados mayoritariamente perciben el incumplimiento de esta función de los fiscales en perseguir el delito.

Postulamos que el nivel de aceptación del rol del Ministerio Público referido a la persecución del delito es bajo por los señores abogados, lo cual ha quedado demostrado con los resultados de la investigación.

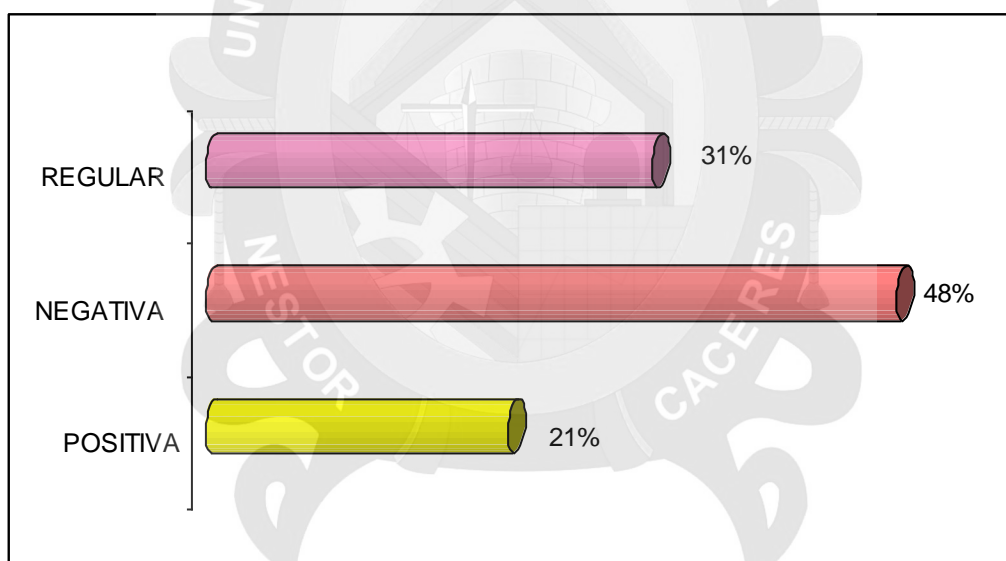
4. ¿EFICACIA DE LOS RESULTADOS EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SOBRE UN HECHO DELICTIVO QUE REALIZAN LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE PUNO?

CUADRO N° 4

Respuesta	Total	%
POSITIVA	42	21
NEGATIVA	96	48
REGULAR	62	31
Total	200	100

Referencia propia del investigador.

GRÁFICO N° 4



Referencia propia del investigador.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 04

En la Tabla número 04 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN RESPECTO A LA EFICACIA DE LOS RESULTADOS EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SOBRE UN HECHO DELICTIVO QUE REALIZAN LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE PUNO?; se ha obtenido como resultado que mayoritariamente 96 abogados encuestados, lo que constituye un 48% contestaron que el resultado en la investigación preparatoria es negativa y en un número menor de 62 abogados que representa el 31% dijo que es regular y en un número aún menor de 42 que constituye el 21% de abogados encuestados dijeron que es positiva. Lo que implica que existe una percepción mayoritariamente negativa respecto a la eficacia de los fiscales en la Investigación Preparatoria, en consecuencia, es notoria la inclinación a un nivel significativo de percepción negativa, respecto a la eficacia de los resultados en la investigación preparatoria en el nuevo Código procesal Penal.

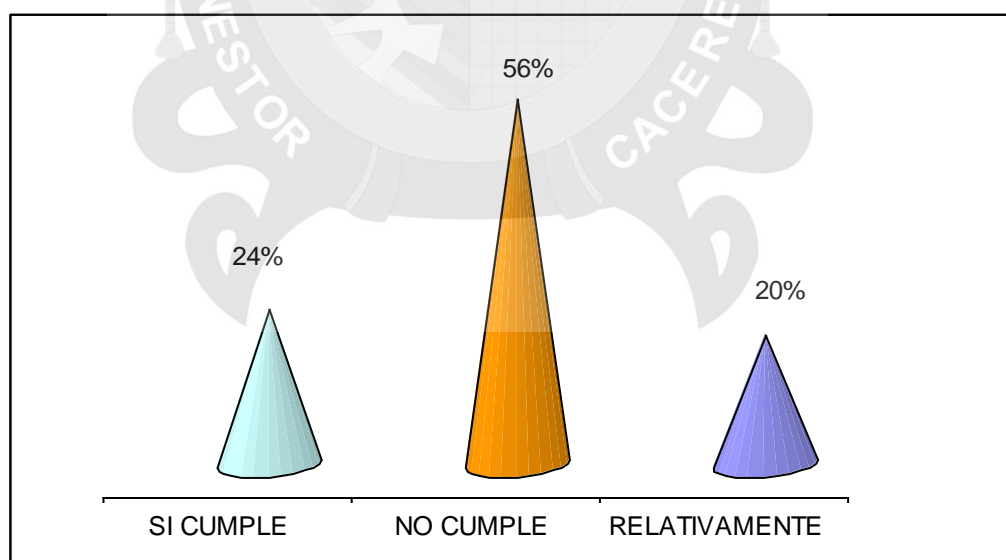
5. ¿EL ESTADO CUMPLE CON OTORGAR AL MINISTERIO PÚBLICO RECURSOS ECONÓMICOS, PERSONAL ESPECIALIZADO (FISCALES) E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA FACILITAR EN FORMA POSITIVA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE PUNO?

TABLA Nº 5

Respuesta	Total	%
SI CUMPLE	48	24
NO CUMPLE	112	56
RELATIVAMENTE	40	20
Total	200	100

Referencia propia del investigador.

GRÁFICO Nº 5



Referencia propia del investigador.



ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA Nº 05

En la tabla número 05 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó si ¿CONSIDERA QUE EL ESTADO CUMPLE CON OTORGAR AL MINISTERIO PÚBLICO RECURSOS ECONÓMICOS, PERSONAL ESPECIALIZADO (FISCALES) E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA FACILITAR EN FORMA POSITIVA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE PUNO?; se ha obtenido como resultado que mayoritariamente 112 que representa un 56% de los abogados encuestados contestaron que el Estado no cumple y en un número menor de 48 que representa el 24% dijo que el Estado si cumple y un número de 40 que constituye el 20% de abogados encuestados dijeron que cumple relativamente. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que el Estado no cumple con otorgar recursos necesarios para cuadyuvar en la labor de los fiscales de la Investigación Preparatoria, consecuentemente en una medida significativa la percepción es negativa respecto a la ayuda que otorga el Estado al Ministerio Público. Postulamos que el nivel de aceptación de los abogados es negativa respecto al apoyo del Estado al Ministerio Público, lo cual ha quedado demostrado con los resultados de la investigación.

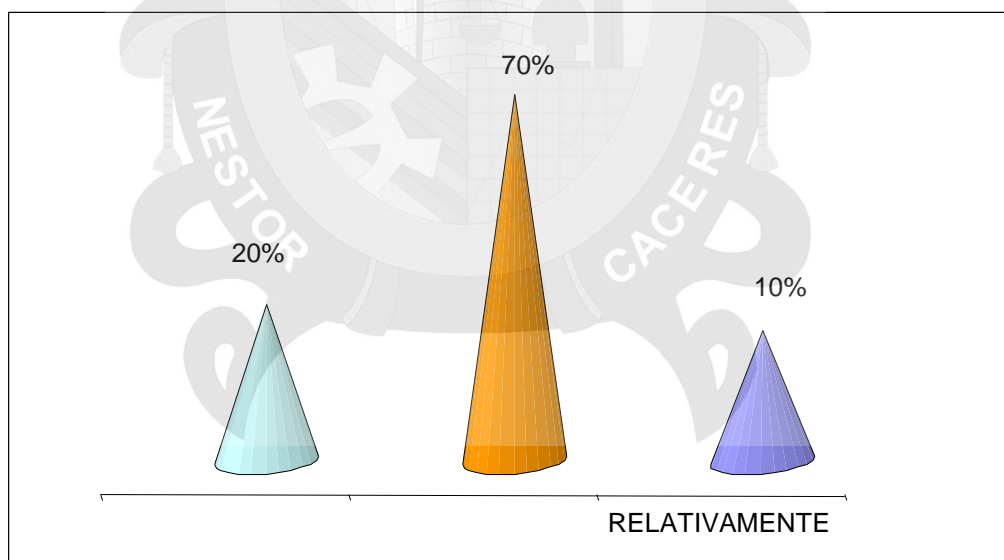
6. ¿EL MINISTERIO PÚBLICO CUENTA CON TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR A CABALIDAD SU ROL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE PUNO?

TABLA Nº 6

Respuesta	Total	%
SI	40	20
NO	140	70
RELATIVAMENTE	20	10
Total	200	100

Referencia propia del investigador.

GRÁFICO Nº 6



Referencia propia del investigador.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 06

En la Tabla número 06 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó si ¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CUENTA CON TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR A CABALIDAD SU ROL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE PUNO?; se ha obtenido como resultado que mayoritariamente 140 que representa un 70% de los abogados encuestados contestaron que no cuenta con todos los medios necesarios y en un número menor de 40 que representa el 20% dijo que si cuenta y un número de 20 que constituye el 10% de abogados encuestados dijeron que relativamente. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que el Ministerio Público no cuenta con los medios necesaria para cumplir cabalmente su rol en la investigación preparatoria en el Nuevo Código Procesal Penal, consecuentemente en una medida significativa la percepción es negativa respecto a la ayuda que otorga el Estado al Ministerio Público.

Postulamos que los abogados perciben de una manera notoriamente mayoritaria que el ministerio Público no cuenta con los medios necesarios para cumplir su rol en la Investigación Preparatoria, lo cual ha quedado demostrado con los resultados de la investigación.

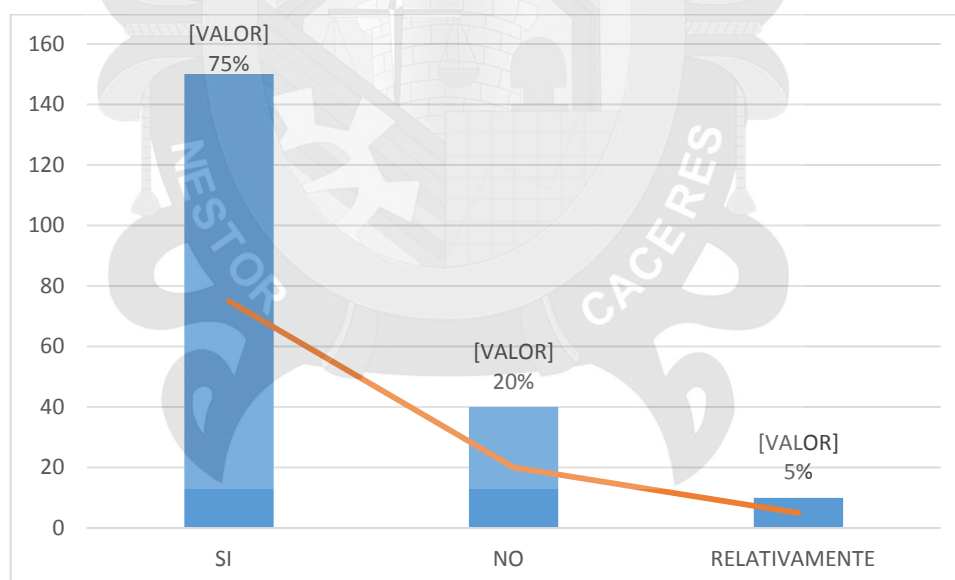
7. ¿EL MINISTERIO TIENE DEFICIENCIAS EN SU ROL DE INVESTIGACIÓN PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN Y ELLO INFLUYE EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO?

TABLA Nº 7

Respuesta	Total	%
SI	150	75
NO	40	20
RELATIVAMENTE	10	5
Total	200	100

Referencia propia del investigador.

GRÁFICO Nº 7



Referencia propia del investigador.



ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 07

En la Tabla número 07 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó si ¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO TIENE DEFICIENCIAS EN SU ROL DE INVESTIGACIÓN PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN Y ELLO INFLUYE EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO?; se ha obtenido como resultado que mayoritariamente 150 que representa un 75% de los abogados encuestados contestaron que si tiene deficiencias y en un número menor de 40 que representa el 20% dijo que no tiene deficiencias y un número de 10 que constituye el 05% de abogados encuestados dijeron que relativamente. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que el Ministerio Público tiene deficiencias en la Investigación Preparatoria en el Nuevo Código Procesal Penal, consecuentemente en una medida altamente significativa la percepción es negativa respecto a este organismo.

Postulamos que los abogados perciben de una manera notoriamente mayoritaria que el Ministerio Público tiene deficiencias en la Investigación Preparatoria, lo cual ha quedado demostrado con los resultados de la investigación.

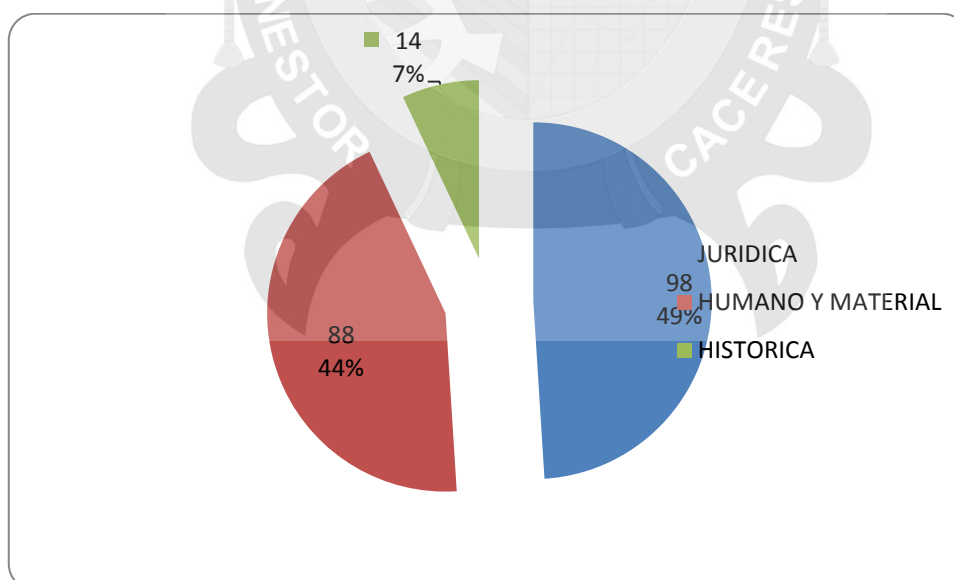
8. ¿FACTORES DE NATURALEZA JURÍDICA, HUMANO Y MATERIAL; E, HISTÓRICO QUE INFLUYE EN EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE TENGA DEFICIENCIAS EN SU ROL CONSTITUCIONAL DE PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE PUNO?

TABLA Nº 8

Respuesta	Total	%
JURIDICA	98	49
HUMANO Y MATERIAL	88	44
HISTORICA	14	07
Total	200	100

Referencia propia del investigador.

GRÁFICO Nº 8



Referencia propia del investigador.



ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA TABLA N° 08

En la Tabla número 08 se observa que en la Provincia de Puno, al haberse encuestado a 200 abogados, a quienes se preguntó ¿CONSIDERA USTED QUE LOS FACTORES DE NATURALEZA JURÍDICA, HUMANO Y MATERIAL; E, HISTÓRICO INFLUYE EN EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE TENGA DEFICIENCIAS EN SU ROL CONSTITUCIONAL DE PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE PUNO?; se ha obtenido como resultado que mayoritariamente 98 que representa un 49% de los abogados encuestados contestaron que es el aspecto de naturaleza jurídica y en un número menor de 88 que representa el 44% dijo que es el factor humano y material en un número de 14 que constituye el 07% de abogados encuestados dijeron que es de naturaleza histórica. Lo que implica que existe una percepción mayoritaria que existen factores que inciden en el Ministerio Público para que tenga deficiencias en la Investigación Preparatoria, siendo preponderantemente los factores jurídico y humano y material.

Postulamos que los abogados perciben de una manera notoriamente mayoritaria que el Ministerio Público tiene factores presupuestarios y humanos que traen como consecuencia un actuar deficiente en la persecución del delito.

5.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS

A continuación se procede a probar la verdad o falsedad de la hipótesis planteada en ésta investigación. El procedimiento es el siguiente:

A) Prueba Chi-Cuadrada

La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra.

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica (O_i). A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada ($E_i = n \cdot p_i$, donde n es el tamaño de la muestra y p_i la probabilidad del i -ésimo valor o intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la O_i y E_i y se define como:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con $k-1$ grados de libertad si n es suficientemente grande, es decir, si todas las

frecuencias esperadas son mayores que 5. En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5.¹

B) Análisis estadístico Chi Cuadrada (Chi-Square Test)

➤ Contrastación de la hipótesis

Hi: $Y=f(X)$ La deficiencia del Ministerio Público en su rol constitucional de conducción de la investigación preparatoria repercute en la persecución del delito.

Ho: $Y \neq f(X)$ La deficiencia del Ministerio Público en su rol constitucional de conducción de la investigación preparatoria no repercute en la persecución del delito.

Se contrasta la hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Por tanto 0.05 es la probabilidad de que se rechace una hipótesis nula verdadera.

Existe 1 grado de libertad ($k-1$ grados de libertad; $2-1$).

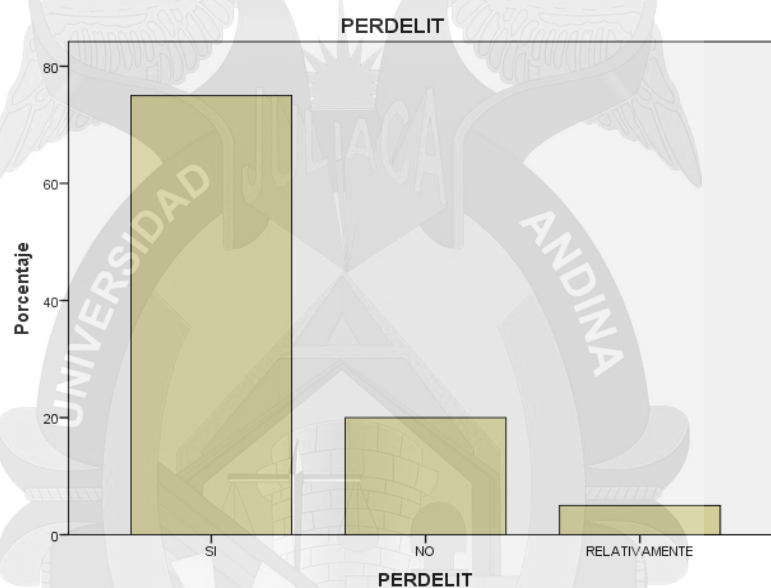
En seguida se presenta la tabla de resultados de la prueba chi cuadrada:

¹

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución Chi-cuadrado con $k-1$ grados de libertad.

PERDELIT

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos SI	150	75,0	75,0	75,0
NO	40	20,0	20,0	95,0
RELATIVAMENTE	10	5,0	5,0	100,0
Total	200	100,0	100,0	



5.2. PRUEBA DE CHI-CUADRADO

Frecuencias

PERDELIT

	N observado	N esperado	Residual
SI	150	66,7	83,3
NO	40	66,7	-26,7
RELATIVAMENTE	10	66,7	-56,7
Total	200		

Estadísticos de contraste

	PERDELIT
Chi-cuadrado	163,000 ^a
Gl	2
Sig. asintót.	,000

a. 0 casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 66.7.

De acuerdo a la tabla chi cuadrada el valor crítico es de 163,000 y es mayor al valor calculado de casilla esperada mínima de 66.7. En consecuencia la regla de decisión es: Se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis formulada en la presente investigación.

a) **Hipótesis estadística de la relación causal**

Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir, que La deficiencia del Ministerio Público en su rol constitucional de conducción de la investigación repercute altamente en la persecución del delito.

Así se observa que el 75%, indica que la deficiencia del Ministerio Público en su rol constitucional de conducción de la investigación preparatoria repercute en la persecución del delito.



CONCLUSIONES

PRIMERA : El Ministerio Público es importante en el ámbito constitucional; sin embargo, en su rol en la Investigación Preparatoria en el nuevo Modelo Procesal Penal tiene deficiencias en la persecución del delito en la Provincia de Puno; tal es así que, al haberse encuestado a 200 abogados, un total de 130 que representa un 65% de los abogados encuestados contestaron que el Ministerio Público si tiene deficiencias en su rol de investigación previsto en la Constitución y que ello influye en la persecución del delito y en un número menor de 50 que representa el 25% dijeron que no tiene deficiencias y un número de 10 que constituye el 05% de abogados encuestados dijeron que relativamente.

SEGUNDA : El Ministerio Público si bien conforme al texto constitucional artículo 158 goza de autonomía; sin embargo, en la percepción de 110 abogados encuestados que constituye un 55% contestaron que no tiene plena autonomía y en un número menor de 86 abogados que representa el 43% dijo que sí tiene plena autonomía y un total de cuatro abogados que constituye el 02% de abogados encuestados dijeron relativamente. Lo que

implica que existe una percepción mayoritaria que el Ministerio Público no tiene autonomía, consecuentemente, si bien es cierto, por norma constitucional el Ministerio Público goza de autonomía; empero, en una medida significativa mayoritaria la percepción es negativa respecto a esta autonomía.

TERCERA : El Ministerio Público en el ámbito de la Provincia de Puno no cumple a cabalidad el mandato contenido en el artículo 159º inciso 4 de la Constitución de 1993, esto es el mandato de conducir la investigación del delito, tal es así que se ha obtenido como resultado que un 59% de abogados consideran que los Fiscales no cumplen tal función, solo un 15% dijo que sí cumple y 26% de abogados consideran que relativamente. Por lo que la percepción mayoritaria es que el representante del Ministerio Público no cumple este mandato constitucional referente a la conducción de la investigación del delito, similar percepción es referente al cumplimiento del mandato del Decreto Legislativo 052 respecto a la persecución del delito.

CUARTA : Es incuestionable que el Estado no cumple con otorgar al Ministerio Público recursos económicos, personal especializado (fiscales) e instrumentos técnicos y científicos para facilitar en forma positiva la investigación preparatoria de los fiscales en el Distrito Judicial de Puno.



QUINTA : Existen factores de naturaleza jurídica, humano y material; e, histórico que influyen en el Ministerio Público Y genera deficiencias en su rol constitucional de persecución e investigación del delito en el nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Puno.





SUGERENCIAS

PRIMERA : A efectos de disminuir el nivel de deficiencia del Ministerio Público en su rol constitucional de investigación y persecución del delito en la Provincia de Puno y Distrito Fiscal de Puno, se requiere para los operadores capacitación continua y la realización de eventos académicos en los que se difunda el rol del Fiscal en este aspecto. El nuevo Código Procesal Penal ha entrado en vigencia en la región de Puno el primero de octubre del año 2009; sin embargo, a esa fecha los fiscales no se habrían capacitado debidamente a efectos de conocer los alcances del nuevo sistema procesal penal. Debiendo concientizar a los operadores del derecho que la deficiencia en este aspecto trae como consecuencia el incremento de la criminalidad. Los señores Fiscales deben tomar conciencia que el ejercicio exitoso del cargo requiere de capacitación continua de lo cual dependerá su desarrollo profesional y lo que es más importante el cumplimiento del mandato constitucional.

SEGUNDA : El Estado a fin de contrarrestar el incremento de la criminalidad en el país y, especialmente, en el ámbito del Distrito Judicial de Puno, está en la obligación de prestar apoyo en las actividades del Ministerio Público y a los Fiscales en su labor de investigación y persecución del delito, por ende la lucha contra la delincuencia. Para cuyo efecto debe priorizar lo siguiente: a) Otorgar los recursos económicos suficientes conforme a la petición del Fiscal de la Nación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso; b) implantar laboratorios sobre criminalística en todos los Distritos Judiciales a nivel nacional para hacer científica y más técnica la investigación preparatoria; c) contar con recursos humanos: fiscales en el número suficiente acorde a la cantidad de la población, de la misma manera personal administrativo, personal medicina legal, peritos especializados suficientes para asumir con éxito rol constitucional; d) infraestructura adecuada e implementada; e) material logístico conforme a las exigencias del novísimo Código Procesal Penal.

TERCERA : Se ha constatado que los Fiscales, carecen del dominio en el manejo del nuevo Código Procesal Penal, en consecuencia, también como la sugerencia anterior, los abogados antes de ingresar al ejercicio de ser Fiscales, por ejemplo adjuntos, deben recibir una intensa preparación por los especialistas de la Academia de la Magistratura y otros organismos autorizados para la capacitar. Máxime, si una reforma no solo implica



cambios de procedimientos, sino que se trata de una transformación integral del sistema. El nuevo proceso exige esa radical modificación del ordenamiento jurídico en general; un mayor compromiso desde los altos niveles jerárquicos y una mejor coordinación entre las entidades, pero sobre todo un cambio cultural que orienta el rol de cada operador del sistema hacia la elaboración de políticas en beneficio de la población, que mejorará el uso de los recursos disponibles y del presupuesto, de tal manera que se logre cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el sistema de justicia en el país.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2007). *Código Procesal Penal- Manuales Operativos*, (1ª ed.). Lima: Super Gráfica.
- 2) ARANGUREN MARTINES, Jesús. (s.f.). El nuevo sistema procesal penal- análisis critico.
- 3) BACIGALUPO, Enrique.(1994) *Estudios sobre la Parte Especial del Derecho Penal*. Madrid, Akal; 2ed.
- 4) BELING, Ernest (1943). *Derecho Procesal Penal*. España: Editorial Labor S.A.
- 5) BERNALES BALLESTEROS, Enrique. (2012)*La Constitución de 1993*. 6ª Ed. Lima, Idemsa.
- 6) BINDER, Alberto M. (2004). *Introducción al Derecho Procesal Penal*. (2ª ed.). Buenos Aires.
- 7) BOVINO, Alberto (2005). *Principios políticos del procedimiento penal*. Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L.



- 8) BRAMONT-ARIAS, Luis. (1991) *Manual de Derecho Penal* (Parte Especial.). Lima, San Marcos, 4 ed., 1991.
- 9) BRAVO CABRERA, Francisco Javier (2012). *La afectación del debido proceso por causa de la impugnabilidad del auto de llamamiento a juicio. Propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal*. Tesis para optar grado de licenciado en jurisprudencia. Universidad de Loja-Ecuador.
- 10) BURGOS (2002). *El proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad*. Tesis para la Unidad de Post Grado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- 11) BURGOS MARIÑOS, Victor (2002). *El proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad*. Tesis para la Unidad de Post Grado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- 12) BUSTOS RAMÍREZ.(1991) *Manual de penal* [Parte Especial]. Barcelona, Ariel, 2 ed.
- 13) CADAVID BOTERO, Mario Nicolás y BEDOYA SIERRA, Luis Fernando (2008). *La fase de investigación y la fiscalía en el sistema acusatorio colombiano*. En: Reflexiones sobre el sistema acusatorio -Una visión desde la práctica judicial-, varios autores. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Medellín (Colombia).
- 14) CALDERÓN SUMARRIVA, Ana C. (s.f.). *El Nuevo Sistema Procesal Penal: Análisis crítico*. EGAL Lima Perú



- 15) CARO JOHN, Jose Antonio (2007). *Diccionario de Jurisprudencia Penal*.
Lima: Editorial Grijley.
- 16) CASTILLO ALVA, José Luís.(2002) *Principios de Derecho Penal* [Parte General]. Lima, Gaceta Jurídica.
- 17) CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994). *La tutela efectiva*. Editorial Bosch. Barcelona: Editorial Bosh.
- 18) CHÁVEZ TORRES, Wilber Alberto. (s.f.). El archivo fiscal y su aplicación en el nuevo Código Procesal Penal. *página 2*
- 19) CUBAS VILLANUEVA, Víctor y Otros (2003). *El nuevo Código Procesal Penal- Estudios Fundamentales*. Lima: Palestra editores.
- 20) DE LEON VELASCO, Héctor Aníbal (2002). *Los recursos en el sistema procesal penal guatemalteco y en el derecho comparado*” Tesis Doctoral para la ESCOLA DE POSTGRAU UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA.
- 21) DE SANTO Víctor (1999). *Tratado de los recursos. Tomo I, Recursos Ordinarios*, (2ª ed.). Buenos Aires: Editorial universidad.
- 22) DERECHO & SOCIEDAD (2008). *Factores que influyen en la aplicación del nuevo código procesal penal*. 23 de Julio
- 23) DOCTRINA JURISPRUDENCIAL (2010).Contenida en la STC. 2748-2010-PHC/TC).



- 24) DOIG DÍAZ, Yolanda (2004). *"El sistema de recursos en el proceso penal peruano. Hacia la generalización de la doble instancia y la instauración de la casación, en La Reforma del Proceso Penal Peruano. Anuario de Derecho Penal 2004.* Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Universidad de Friburgo.
- 25) DOIG DÍAZ, Yolanda (2005). *"El recurso de apelación contra sentencias" en El nuevo proceso penal. Estudios Fundamentales.* (1ª ed.). Palestra editores. Lima: Palestra editores.
- 26) ECHEANDIA DEVIS (1996), *Compendio de derecho procesal.* Bogotá: Editorial ABC.
- 27) ESPINOSA - SALDAÑA BARRERA, Eloy (2000). *El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a los aportes hechos por nuestra Corte Suprema sobre el particular. En Cuadernos Jurisdiccionales.* Asociación Civil. Lima: Ediciones Legales S.A.C.
- 28) FLORES PRADA (1999). *El Ministerio Público.* pp. 3 y 37.
- 29) FONTÁN BALESTRA, Carlos.(1969) *Derecho Penal [P.E.].* Buenos Aires, Abeledo –Perrot, T I
- 30) GARCÍA DEL RÍO, Flavio (2002). *Los recursos en el proceso penal.* Lima: Ediciones Legales S.A.C.
- 31) GARCÍA RADA, Domingo (1975). *Manual de Derecho Procesal Penal.* (4ª ed.) Lima: Editorial e Imprenta Carrera.



- 32) GIMENO SENDRA Vicente (1996). *Derecho Procesal Penal*. Madrid: COLEX.
- 33) GUASH FERNÁNDEZ, Sergi (2003). *"El sistema de impugnación en el Código Procesal Civil del Perú. Una visión de derecho comparado con el sistema español"*, en *Derecho Procesal Civil. Congreso Internacional*. (1ª ed.). Lima: Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima.
- 34) HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (1999). *Medios Impugnatorios*. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- 35) HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2006). *Resoluciones Judiciales y Cosa Juzgada*. (1ª ed.). Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- 36) HITTERS, Juan Carlos (2004). *Técnica de los recursos ordinarios*. (2ª ed.). La Plata-Argentina: Librería Editora Platense.
- 37) HURTADO REYES, Martín.(2006) *Tutela jurisdiccional diferenciada*. Lima, Palestra, 2006.
- 38) IBERICO CASTAÑEDA, Luis Fernando Alberto (2007) *"Manual de impugnación y Recursos en el Nuevo Modelo Procesal Penal, en ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2007). Código Procesal Penal- Manuales Operativos*, (1ª ed.). Lima: Super Gráfica.



- 39) JERI CISNEROS, Julian Genaro (2002). *Teoría General de la Impugnación penal y la problemática de la apelación del auto de no haber lugar a la apertura de instrucción por el agraviado*. Tesis para optar el grado de Magister en Ciencias Penales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- 40) JORNADAS DE DERECHO PROCESAL (2009). *Teoría de la Impugnación*, Lima: Palestra Editores.
- 41) LANDA ARROYO, César. "Dignidad de la Persona Humana"; en *Ius et Veritas*. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Lima; Año X, Nº 21.
- 42) LOPEZ PULE, María Fernando (2006). *Cuestiones problemáticas en la casación material*, en MAIER, Julio B.J. Y Otros (Comp.) Los recursos en el procedimiento penal. (2ª ed.). Buenos Aires: Editores del Puerto.
- 43) LOUTAYF RANEA, R. (1999). *La apelación adhesiva en Revista de Derecho Procesal 3: Medios de Impugnación. Recursos-II*. Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos Aires
- 44) MAIER, Julio B. (2002). *Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos* (2ª ed.). Buenos Aires: Editorial del Puerto SRL.
- 45) MEDIOS IMPUGNATORIOS. (2010). *Lo nuevo del Código Procesal Penal del 2004 sobre los medios impugnatorios* (1ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.



- 46) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (s.f.). *Sistema Peruano de Información Jurídica*.
- 47) MINISTERIO PÚBLICO, Fiscalía de la Nación (s.f.). *Defensores de la legalidad*
- 48) MIXAN MASS, Florencio. (2009). *Recursos Impugnativos en el Nuevo Proceso Penal*. Lima: Ediciones BLG.
- 49) MONTERO AROCA, (2008). *Proceso Penal y Libertad*. (1ª ed.). España: Thomson.
- 50) MORENO CATENA, Víctor (1995). *Derecho Procesal Civil*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- 51) MUÑOZ CONDE, Francisco.(1999) *Derecho Penal* [Parte Especial]. Valencia, Tirant lo Blach, 12 ed..
- 52) MUÑOZ NEIRA, Orlando. (2006) *Sistema Penal Acusatorio de Estados Unidos*. (1ª ed.). Colombia: Legis.
- 53) NEYRA FLORES, José Antonio (2010). *Manual del Derecho Procesal Penal. Lima: Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral*. Lima: Editorial IDEMSA.
- 54) ORE GUARDIA, Arsenio. (2010). *En Medios Impugnatorios-lo nuevo del Código Procesal Penal del 2004 sobre los Medios Impugnatorios* (1ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.



- 55) PEÑA CABRERA FREYRE Alfonso Raúl (2007). Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal, 1ra. Edición, Abril Editorial Rodhas, p. 78.
- 56) PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. (2011). *Derecho Procesal Penal*. (1ª ed.). Lima: Editorial RODHAS.
- 57) PEÑA CABRERA, Raúl.(1992) *Tratado de Derecho Penal* (P.E.). Lima, Ediciones Jurídicas, T. I.
- 58) PEÑA GONZALES, Oscar y Frank ALMANZA ALTAMIRANO. (2010) *Teoría del Delito*. Lima, APEC.
- 59) PEREZ PINZON, Alvaro Orlando (2004). *Los Principios Generales del Proceso Penal*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- 60) RAVELLO CASTILLO, Jose Luis (2014). *Tesis Calidad de sentencias de primer y segunda instancia, sobre hurto agravado, en el expediente N° 01777-2010-0-2501-JR-PE-04, del Distrito Judicial del Santa-Chimbote 2014*. Universidad Los Ángeles de Chimbote.
- 61) RIOS, Ramón Teodoro (1999). *Influencia de los principios acusatorio y de legalidad en la impugnación penal, en Revista de Derecho Procesal 3: Medios de Impugnación*. Recursos-II- Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.
- 62) ROSAS YATACO, Jorge (2009). *Manual de Derecho Procesal Penal*. (1ª ed.). Lima: Grijley.



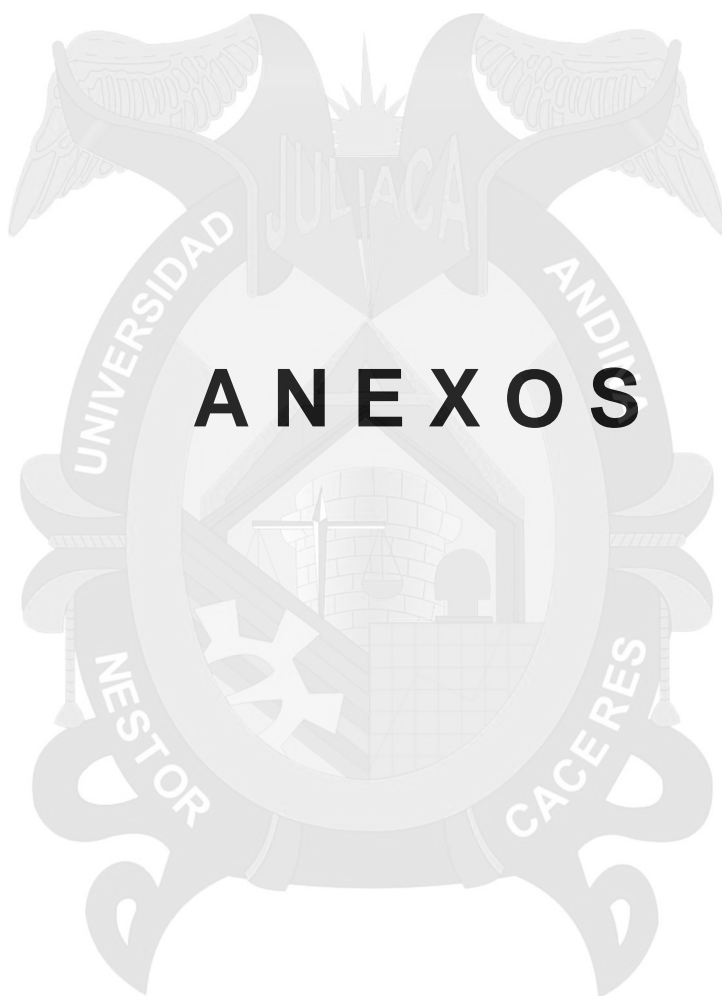
- 63) ROY FREYRE, Luís.(1975) *Derecho Penal Peruano*. Lima, Instituto Peruano de Ciencias Penales; T. II.
- 64) SALAS BETETA Christian (2004). Relaciones funcionales entre el ministerio público y la policía nacional durante la investigación preparatoria Binomio necesario en la investigación criminal según el CPP-2004
- 65) SAN MARTIN CASTRO, Cesar (1999). *Derecho Procesal Penal. II Volúmenes*. Lima: Grijley.
- 66) SAN MARTIN CASTRO, Cesar (2006). *Derecho Procesal Penal. II Tomos* (2ª ed.). Lima: Grijley.
- 67) SAN MARTÍN CASTRO, César.(2012) (Coordinador). *Estudios de Derecho Procesal Penal*. Lima, Grijley.
- 68) SANCHEZ VELARDE, Pablo (2009). *El Nuevo Proceso Penal*. (1ª ed.). Lima: IDEMSA.
- 69) SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA-SPIJ (2014). *Ministerio de Justicia*.
- 70) TAMBINI DEL VALLE, Moisés.(1999) *La prueba en el Derecho Procesal Penal*. Lima, Jus Editores.
- 71) VILLA STEIN, Javier (2010). *Los Recursos Procesales Penales*. Lima: Gaceta Jurídica.



- 72) VILLA STEIN, Javier.(1998) *Derecho Penal* (P.E). Lima, San Marcos, T. I- B.
- 73) VILLALOBOS BLANCA, Alexandra (2013). La Revisión del dictado de Sobreseimiento Definitivo en la fase previa al debate ante un Tribunal Superior como una garantía del Debido Proceso en Costa Rica. Tesis para optar título de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica.

Lincografía

- 74) www.mininter.gob.pe.
- 75) www.pnp.gob.pe.
- 76) www.hemeroteca.com.
- 77) www.investigacioncriminal.com
- 78) www.monografias.com
- 79) <http://portal.mpfm.gob.pe/home/historia>
- 80) <http://www.guia-urbana.com/tendencias/criminalidad.php>
- 81) [https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_\(funcionario\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal_(funcionario))
- 82) <https://es.wikipedia.org/wiki/Magistrado>
- 83) https://es.wikipedia.org/wiki/Magistratura_romana
- 84) https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico_del_Per%C3%BA



ANEXOS



ANEXO N° 1.

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

1.1. TEXTO :

1.2. UBICACIÓN :

1.3. LUGAR :AÑO.....

II. CRITERIOS DE INVESTIGACION.

TITULO DEL TEXTO	MATERIA	PAGINA	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
DENOMINACION DEL FUNDAMENTO	ARGUMENTO	PAGINA	COMENTARIOS U OBSERVACIONES



ANEXO 2

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

ESCUELA DE POSTGRADO

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Sr. (a) abogado (a), sírvase absolver el siguiente cuestionario referido a la IMPORTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL Y SU ROL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CON EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL, PUNO: 2011- 2012.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA.

- 1. ¿EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE PLENA AUTONOMÍA CONFORME PRESCRIBE EL ARTÍCULO 158º DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993?**
 - a) Si
 - b) No
 - c) Relativamente

- 2. ¿EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS FISCALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO CUMPLEN A CABALIDAD EL MANDATO DEL ARTÍCULO 159º INCISO 4 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN?**
 - a) Si
 - b) No
 - c) Relativamente



3. **¿CONSIDERA UD., QUE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS FISCALES CUMPLEN ACERTADAMENTE LOS MANDATOS EXPUESTOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 RESPECTO A LA PERSECUCIÓN DEL DELITO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE PUNO?**
 - a) Si
 - b) No
 - c) Relativamente
4. **¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN RESPECTO A LA EFICACIA DE LOS RESULTADOS EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SOBRE UN HECHO DELICTIVO QUE REALIZAN LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE PUNO?**
 - a) Positiva
 - b) Negativa
 - c) Regular
5. **¿CONSIDERA QUE EL ESTADO CUMPLE CON OTORGAR AL MINISTERIO PÚBLICO RECURSOS ECONÓMICOS, PERSONAL ESPECIALIZADO (FISCALES) E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA FACILITAR EN FORMA POSITIVA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LOS FISCALES EN LA PROVINCIA DE PUNO?**
 - a) si cumple
 - b) no cumple
 - c) relativamente



6. **¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CUENTA CON TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR A CABALIDAD SU ROL CONSTITUCIONAL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE PUNO?**
- a) Si
 - b) No
 - c) Relativamente
7. **¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO TIENE DEFICIENCIAS EN SU ROL DE INVESTIGACIÓN PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN Y SI ELLO INFLUYE EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITO?**
- a) Si
 - b) No
 - c) Relativamente
8. **¿CONSIDERA USTED QUE LOS FACTORES DE NATURALEZA JURÍDICA, HUMANO Y MATERIAL; E, HISTÓRICO INFLUYE EN EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE TENGA DEFICIENCIAS EN SU ROL CONSTITUCIONAL DE PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE PUNO?**
- a) Factor Jurídico
 - b) Factor humano y material
 - c) Factor histórico